

Cambios globales, retos locales: el panorama de la soja y la carne vacuna en Sudamérica



Ganado en un campo en Cerquitho, estado de São Paulo, Brasil (Imagen: Dan Agostini / Diálogo Chino)



Soja en una granja en Júlio de Castilhos,
estado de Rio Grande do Sul, Brasil
(Imagen: Daniel Marengo / Diálogo Chino)

Contenidos

Prólogo de los editores		2
Argentina impulsa la trazabilidad de la soja para garantizar deforestación cero		4
Opinión: China puede ayudar a la Amazonía a través del comercio de cuero		7
¿Los incendios impulsarán por fin una ley de humedales en Argentina?		10
Cofco: la falta de datos genera dudas sobre el origen de la soja brasileña		13
La Niña termina, pero la sequía expone problemas más profundos en Argentina		17
La ley contra la deforestación de la UE, una prueba para la agricultura sudamericana		20
¿Puede un foco de deforestación de Brasil convertirse en un líder ambiental?		25
China reduce las importaciones de soja y plantea interrogantes para América del Sur		30
El 'pasaporte verde' puede fomentar el comercio sostenible de carne vacuna de Brasil a China		34
Brasil impulsa la recuperación de tierras degradadas		38

Prólogo de los editores

Tras haber afrontado la pandemia de Covid-19 y la cambiante dinámica mundial desde la invasión rusa a Ucrania, los agricultores sudamericanos pueden haber pensado que 2023 iba a ser un año más estable. A muchos les ha ido bien: Brasil, por ejemplo, cuenta con una cosecha récord de soja para la temporada 2022/23. Pero también ha sido un año marcado por condiciones meteorológicas extremas, exacerbadas por el cambio climático. En muchas regiones, esto ha tenido importantes repercusiones en la producción, el comercio, los ecosistemas y la capacidad de recuperación de los productores.

En el corazón agrícola de Argentina, una grave sequía desencadenada por el patrón meteorológico de La Niña -que duró, de manera poco frecuente, tres años- afectó a los productores de carne vacuna y soja y agravó los problemas económicos del país. Los productores del sur de Brasil también se vieron perjudicados y, aunque La Niña ya ha pasado, la llegada de su contraparte, El Niño, trajo consigo un aumento de las precipitaciones y una nueva serie de desafíos que podrían impactar al próximo ciclo de cosechas.

Sin embargo, las dificultades climáticas no han frenado del todo la expansión agrícola en ambos países, y varias regiones se enfrentan a presiones sobre el uso de la tierra. En los humedales argentinos, por ejemplo, organizaciones ambientales han alertado sobre los incendios forestales sin precedentes que, según los activistas, fueron provocados deliberadamente por productores de carne vacuna que deforestaron áreas boscosas para ganar terreno de pasturas. A pesar de estas amenazas y de ocupar el 20% del territorio argentino, la mayoría de estos humedales siguen sin estar protegidos por la ley.

También se han visto cambios globales más amplios en 2023, con consecuencias para el comercio sudamericano de soja y carne vacuna. En mayo, la Unión Europea adoptó una nueva ley que prohibirá la importación de materias primas asociadas a la deforestación y las violaciones de los derechos humanos a partir de 2025. Esto podría ayudar a sanear las cadenas de suministro latinoamericanas, usualmente afectadas por impactos socioambientales negativos, y obligar a otros mercados, como EE.UU. y China, a aplicar normativas similares.

En China, el mayor comprador mundial de soja, un cambio en las tendencias agrícolas plantea interrogantes para los productores sudamericanos, ya que el país pretende aumentar su producción nacional de soja y reducir su dependencia a las importaciones, en el marco de una iniciativa nacional más amplia de seguridad alimentaria. Después de años de crecimiento para satisfacer la creciente demanda china, esto podría significar cambios para Brasil y Argentina, aunque los analistas aún ven pocas repercusiones a corto plazo.

Junto a los cambios políticos en los países compradores, los intentos de ecologizar el comercio y reducir la huella de la agricultura también se están impulsando desde Sudamérica, tanto de arriba a abajo como de abajo a arriba. En Brasil, la deforestación en la Amazonía ya se ha reducido un tercio durante los seis primeros meses de la nueva presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, y se está llevando a cabo una campaña nacional para recuperar tierras degradadas para uso agrícola y así evitar que se sigan deforestando más superficies forestales. Al mismo tiempo, en Brasil también se imaginan futuros alternativos: el estado de Pará, en el

norte brasileño, que durante mucho tiempo fue un foco de deforestación, anunció planes para impulsar la “bioeconomía”, y mantener así más bosques en pie.

La trazabilidad es posiblemente el principal obstáculo para la agricultura. En el sector sojero argentino están surgiendo nuevas plataformas de monitoreo y programas de transparencia en respuesta a las cambiantes demandas del mercado mundial. En Brasil, grandes comerciantes como el gigante chino Cofco se han comprometido a la trazabilidad total de las cadenas de suministro, aunque sus avances son todavía inciertos. Por otra parte, iniciativas multilaterales entre la sociedad civil china y organizaciones estatales brasileñas han dado lugar a propuestas de “pasaportes verdes”, cuyo objetivo es impulsar la transparencia y la sostenibilidad en el comercio de carne vacuna de ambos países.

Con la llegada de normativas como la ley de deforestación de la UE, muchos creen que la trazabilidad es un destino inevitable. Se trata, sin embargo, de un proceso que se enfrentará a grandes desafíos en las complejas cadenas de suministro de la soja y la carne vacuna de Sudamérica, y que solo podrá ser adoptado por los pequeños y medianos productores de la región si se les brinda asistencia.

En medio de la convergencia entre los cambios del mercado y las amenazas climáticas, presentamos esta serie especial de artículos en los que se examina cómo la soja y la carne vacuna sudamericanas se enfrentan a un mundo cambiante, con perspectivas únicas de ambos sectores que traspasan las fronteras. Con contribuciones de destacadas voces del mundo empresarial, científico y gubernamental de Brasil y Argentina, organizaciones de la sociedad civil de China y reportajes en el terreno, esta recopilación ilustra los progresos que se están realizando hacia el comercio sostenible de la soja y la carne vacuna, así como los obstáculos que pueden marcar el camino a seguir.

Fermín Koop y Patrick Moore
Editores para América Latina, Diálogo Chino





Un trabajador observa cómo caen granos de soja en un campo en Firmat, provincia de Santa Fe, Argentina (Imagen: Patricio Murphy / Alamy)

[Jorgelina Hiba](#)

Argentina impulsa la trazabilidad de la soja para garantizar deforestación cero

Empresas agropecuarias y organizaciones que agrupan a productores llevan adelante proyectos para darle más transparencia a la producción de la soja

Con mercados de exportación cada vez más exigentes como la Unión Europea y una presión social muy atenta a los criterios de sustentabilidad en la producción de alimentos, productores y comercializadores de soja de Argentina intentan avanzar hacia sistemas de trazabilidad del cultivo para garantizar que la producción provenga exclusivamente de campos libres de deforestación.

La soja es una de las

mayores fuentes de proteína del sistema alimentario mundial, y tanto sus granos como sus subproductos se destinan mayoritariamente a la alimentación de animales. En Argentina es un cultivo clave y un enorme generador de divisas, ya que el país es el tercer mayor productor del mundo detrás de Estados Unidos y Brasil.

La historia de su cultivo data de principios del siglo XX, aunque su expansión

ocurió durante las últimas décadas. Mientras que en la campaña 1971/1972 se sembraron unas 80 mil hectáreas, ese número trepó a 2 millones diez años después (1981/1982), para alcanzar los 16 millones de hectáreas en 2007/2008 con precios record.

Esa expansión vino acompañada de un proceso intenso de cambio de uso del suelo que incluyó pérdida de bosques, especialmente en el bioma del Chaco argentino. Este ecosistema, el segundo más amplio de Sudamérica después del Amazonas, es uno de los 24 grandes “frentes de deforestación” a nivel global, de acuerdo a WWF.

Según Greenpeace, el norte de Argentina perdió 110.000 de hectáreas de bosques en 2021. Para Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, la mitad de la deforestación en el país es ilegal: o se hace en zonas prohibidas o con “permisos flojos”.

En ese marco, avanzar con esquemas de trazabilidad que garanticen soja con deforestación cero, puede ser clave, sostiene: “El 10% de la soja argentina viene del norte y allí hay que ver si su origen es ilegal o no. Es difícil de trazar, porque es una cadena larga y compleja y luego los puertos exportadores acumulan soja de diferentes procedencias”.

MERCADOS MÁS EXIGENTES

Sudamérica en general, y Argentina en particular, tendrán que avanzar con esquemas de trazabilidad para responder a las nuevas exigencias de Europa, uno de sus mercados de exportación. En diciembre, los legisladores de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre una normativa que intentará garantizar que todos los productos vendidos a su territorio no provengan de tierras deforestadas.

“Europa está avanzando rápido con restricciones de importaciones de productos que son hoy los grandes drivers de deforestación global: soja, carne, cacao y otros” dijo Giardini. “Si los países sudamericanos quieren mantener su modelo agroexportador, la

“

Si arranca Europa, siguen Estados Unidos y el Reino Unido, y atrás vienen China, India y casi todos los compradores

Gustavo Idigoras

Cámara de la Industria Aceitera de Argentina

deforestación es el principal tema a resolver en el corto plazo”, agregó.

Gustavo Idigoras es presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina (CIARA) y realiza el mismo diagnóstico: “Los mercados nos daban una oportunidad de desarrollar estos programas de trazabilidad como nicho de mercado, pero ya se está transformando en una condición de producción y de acceso a esos mercados y ese es un cambio trascendental”.

“Hasta ahora podíamos decidir si hacer algo o no, pero eso ya no va a existir. Si arranca Europa, siguen Estados Unidos y el Reino Unido, y atrás vienen China, India y casi todos los compradores”, agrega.

Ya existen en Argentina varias iniciativas para garantizar la trazabilidad del cultivo, tanto por parte de algunas empresas a nivel individual como otras con mirada más sectorial.

Un ejemplo a pequeña escala es el convenio entre

Ucrop.it, una start-up con sede en Buenos Aires que hace seguimientos de cultivo mediante una aplicación, y la comercializadora de materias primas Viterra Argentina, que ofrece a los productores mejores precios si transparentan los datos de su producción desde la siembra hasta la cosecha en dicha app.

Por otra parte, la multinacional Louis Dreyfus Company (LDC), comercializadora y procesadora de soja, se comprometió a aumentar su porcentaje de producción de soja sostenible en Argentina. En colaboración con productores locales, ha trabajado para mejorar la documentación para la trazabilidad en toda la cadena de suministro. Para la temporada 2020-21, pudo certificar que el 77% de la soja procesada en el complejo General Lagos de Rosario -una de las mayores instalaciones de procesamiento de soja del mundo- era “sostenible”, lo que definieron como soja producida en tierras que no han sido desmontadas al menos desde 2008.

A mayor escala, existen diferentes iniciativas de agricultura sustentable para el Gran Chaco financiadas por la Land Innovation Foundation (LIF), un fondo creado por la empresa global Cargill para buscar soluciones a la deforestación y medios de vida sostenibles. “Nuestro objetivo es promover y apoyar soluciones innovadoras para lograr una cadena de abastecimiento de soja que sea libre de deforestación y carbono neutral”, dijo Carlos Quintela, el director de ese fondo. Cargill se ha enfrentado a reiteradas acusaciones de impulsar la deforestación y los incendios forestales, incluso en la región del Gran Chaco, como destacó un informe de 2018.

Uno de esos proyectos es desarrollado por los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) y la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA) y busca avanzar hacia modelos agrícolas sustentables en todas sus dimensiones: la ambiental, la económica y la social. El proyecto trabaja en estrecha colaboración con 100 pequeños y medianos agricultores que trabajan en 250.000 hectáreas en el Chaco, supervisando y promoviendo prácticas de intensificación sostenible que impulsen la producción en sus tierras actuales, así como la restauración de los suelos degradados.

Según explicó Federico Fritz, experto en desarrollo sustentable de CREA, esperan tener para 2024 una evaluación que les permita

identificar los puntos más críticos en la producción de soja sustentable

Otro proyecto es el que lleva adelante ProYungas junto a la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid) en tres sitios pilotos en el Gran Chaco, que comenzó en mayo de este año y se extenderá durante 36 meses. Entre sus objetivos están fortalecer la sinergia con las organizaciones territoriales y pasar a un desarrollo agrícola a escala del paisaje que integre los conceptos de producción y conservación.

“Buscamos una gestión del territorio pensado a la escala de paisaje, con un trabajo de medición de la huella de carbono de toda la cadena de la soja”, apuntó Sebastián Malizia, de ProYungas.

NUEVA PLATAFORMA DE MONITOREO

El LIF también financia un ambicioso proyecto gestionado por la CIARA llamado VISEC, una plataforma de monitoreo unificado de la cadena de suministro de soja en Argentina que combina sistemas público y privado y busca poder trazar ese cultivo en áreas prioritarias de conservación en el Gran Chaco y, en última instancia, frenar la deforestación.

Lanzado en mayo de 2022, el sistema VISEC pretende reunir en una plataforma unificada los datos de seguimiento y verificación de toda la soja comercializada en Argentina, abarcando

diversos parámetros y requisitos de sostenibilidad ambiental y social.

La iniciativa requerirá la participación y las contribuciones de toda la cadena de suministro, desde agricultores y comerciantes hasta las comunidades vecinas, con el objetivo de crear una base de datos transparente y de acceso público.

Para Idigoras, este programa es superador ya que va más allá de las iniciativas individuales de algunas empresas, para avanzar en un sello de deforestación cero para toda la cadena de la soja argentina. “Ya llevamos tres años de trabajo en esta plataforma, hablamos con las entidades que representan a los 80 mil productores de soja argentina, corredores, acopiadores y cooperativas. Estamos convencidos que esto tiene que ser una acción colectiva consensuada”, dijo.

El desafío está en la implementación del sistema para cumplir lo que piden los mercados y dar “garantía real y efectiva” de trazabilidad y transparencia, sostiene Idigoras, quien apunta a lograr que todas las exportaciones de aceite, harina y porotos de soja sean 100% libre de deforestación. “El nivel de soja proveniente de deforestación ilegal es menor al 5% de la producción anual [en Argentina], bajo en relación a otros países. Queremos llegar al cero, por eso vamos a trabajar”. 

Opinión: China puede ayudar a la Amazonía a través del comercio de cuero

China debe actuar para evitar convertirse en un “vertedero” de productos vinculados a la deforestación



Ganado en un terreno lindante a uno recientemente deforestado y quemado en Candeias do Jamari, estado de Rondônia, Brasil. La ganadería es responsable del 80% de la deforestación de la Amazonía brasileña (Imagen © Victor Moriyama / Amazônia em Chamas)

La deforestación en la Amazonía brasileña alcanzó su nivel más alto en 15 años en 2021, amenazando los esfuerzos mundiales para mitigar el cambio climático y detener la pérdida de biodiversidad. Aparte del propio Brasil, quizás no haya otro país con tantas oportunidades de ayudar a evitar la destrucción de sus bosques como China, su mayor cliente

para los dos productos agrícolas que son los principales impulsores de la deforestación: la soja y el ganado.

En 2021, China fue el destino de cerca del 70% de la soja, el 60% de la carne vacuna congelada y el 30% de las pieles de vaca procesadas exportadas por Brasil, por un valor de más de 30.000 millones de dólares, según

datos de UN Comtrade. Esto da a China una oportunidad significativa para ayudar a dar forma a cómo se producen estas materias primas en Brasil.

La ganadería es responsable del 80% de la deforestación de la Amazonía brasileña, y la mayor parte es ilegal según las leyes vigentes que protegen el medioambiente y los derechos de los

pueblos indígenas. Pero en los últimos años, el gobierno nacional no ha aplicado ni ha hecho cumplir adecuadamente estas leyes. Además, rara vez se responsabiliza a quienes se benefician de los delitos ambientales.

También influyen los mercados mundiales que aceptan productos vinculados a la deforestación y los delitos. La Agencia de Investigación Medioambiental (EIA por su sigla en inglés) ha publicado recientemente los resultados de un estudio de varios años que muestra cómo el ganado criado en zonas deforestadas ilegalmente en la Amazonía, incluso dentro de un área protegida, entra en las cadenas de suministro de las mayores empresas de carne y cuero de Brasil. Estas empresas exportan a los principales mercados de consumo, como Estados Unidos, la Unión Europea y China, donde el cuero se

utiliza para fabricar una amplia gama de productos, desde zapatos hasta sofás, pasando por asientos de automóviles de marcas emblemáticas como BMW, Ford, General Motors, Toyota y Land Rover.

La industria del cuero intenta lavarse las manos de su rol en la deforestación alegando que el cuero es solo un subproducto de la industria ganadera, pero la venta de pieles es importante para la rentabilidad de los mataderos, un sector en el que los márgenes pueden ser limitados. Brasil exporta más del 80% de sus pieles, y la industria automovilística mundial es uno de los mayores usuarios finales.

La investigación de la EIA demostró cómo las deficiencias sistémicas en la supervisión gubernamental y en los sistemas de trazabilidad de las empresas en Brasil permiten el blanqueo de ganado criado en tierras deforestadas

ilegalmente en las cadenas de suministro. Nuestros hallazgos se suman a un amplio conjunto de pruebas publicadas por la sociedad civil y el Gobierno en la última década, que han demostrado cómo los compromisos voluntarios de las empresas ganaderas brasileñas para eliminar estos animales de sus cadenas de suministro han resultado lamentablemente insuficientes para frenar la pérdida de bosques.

Brasil y sus socios comerciales deben poner en marcha medidas reguladoras para desvincular sistemáticamente la deforestación de la producción y el comercio agrícolas. En el sector ganadero, los requisitos de trazabilidad deben tener en cuenta el ciclo de vida completo de los animales, desde el nacimiento hasta el sacrificio.

El presidente Lula, recién llegado al cargo, ha asumido ambiciosos compromisos públicos para detener la deforestación y las invasiones de las tierras de los pueblos indígenas, pero se enfrentará a la feroz oposición de la poderosa minoría que se beneficia de la destrucción de los bosques. Una fuerte señal del mercado por parte de los mayores socios comerciales de Brasil —ninguno más influyente que China— respaldaría los esfuerzos de Lula al reforzar los argumentos empresariales a favor de las reformas sistémicas necesarias. Estas medidas deben contribuir a crear



Producción de pieles “wet blue” en una curtiembre de Brasil. El tono azul del cuero semiacabado procede del cromo, un agente curtiente. Suele comercializarse así antes de su secado, teñido o acabado en otros lugares (Imagen: Agencia de Investigación Medioambiental)

cadena de suministro de materias primas trazables y transparentes, hacer cumplir las leyes que protegen el medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, y detener la deforestación.

Las medidas del Gobierno chino para exigir a los importadores que garanticen que la soja y los productos ganaderos no están asociados a la deforestación o a delitos ambientales crearían un poderoso incentivo para que el Gobierno brasileño y los productores agrícolas proporcionen bienes que cumplan estas normas.

La otra cara de esta oportunidad son los riesgos inherentes al mantenimiento del *status quo*. La UE adoptó una nueva normativa que exige a las empresas que comercializan productos agrícolas clave en sus mercados la diligencia debida para garantizar que no se han producido mediante deforestación o infringiendo la legislación local. Al parecer, los legisladores estadounidenses están estudiando medidas similares. A medida que los principales mercados cierran sus puertas a los productos relacionados con la deforestación y los delitos contra el medioambiente, los productos que generan más destrucción se dirigirán cada vez más a los mercados no regulados.

EE.UU. y la UE consumen mucha menos soja y

Aumenta la deforestación y disminuyen las restricciones medioambientales

Embargos contra la deforestación ilegal decretados por el IBAMA en el estado de Rondônia, Brasil



Fuente: Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), PRODES • Gráfico por Diálogo Chino

productos ganaderos procedentes de Brasil que China, por lo que es aún más importante que los legisladores de este país también tomen medidas para garantizar que las importaciones de materias primas no estén vinculadas en modo alguno a la deforestación. China no querría que sus mercados se convirtieran en un vertedero para los productos vinculados a la deforestación y los delitos ambientales, ya que esto perjudicaría su credibilidad como líder mundial en los esfuerzos para hacer frente al cambio climático y detener la pérdida de biodiversidad, y como firmante de la Declaración de los Líderes de Glasgow para detener la deforestación antes de 2030.

Hay otros intereses que China debe tener en cuenta a la hora de detener la

deforestación en Brasil. Los científicos advierten que el punto de inflexión de la deforestación, que se aproxima rápidamente, podría provocar el colapso de gran parte del ecosistema amazónico. Además de liberar a la atmósfera miles de millones de toneladas de dióxido de carbono y poner fuera de alcance los límites de aumento de la temperatura del planeta fijados en el Acuerdo de París, esto podría tener repercusiones dramáticas en los regímenes de precipitaciones y en la fiabilidad de la producción agrícola de la región. Teniendo en cuenta su dependencia de las importaciones de alimentos de Brasil, la adopción por parte de China de normativas que garanticen que este comercio no contribuya a la deforestación puede ser una cuestión de interés nacional. 🇺🇳

¿Los incendios impulsarán por fin una ley de humedales en Argentina?



Un carpincho, roedor gigante originario de Sudamérica, en una zona de humedales deforestada en la provincia argentina de Corrientes (Imagen © Emilio White / Greenpeace)

Organizaciones ambientalistas piden por más protección, tras incendios devastadores en humedales del país

Esteban Martín tiene varias decenas de colmenas y una casa sencilla sobre el arroyo El Laurel, en una de las centenares de islas en la provincia argentina de Entre Ríos. Las islas conforman el humedal del Delta del río Paraná, unos de los más extensos, poblados, bellos y biodiversos del mundo.

“Yo soy islero y apicultor”, dice Martín, de 66 años. “Toda la vida viví acá, mi vida es esto, y nunca vi este lugar como ahora, todo seco y quemado. El paisaje de antes ya no existe, después del fuego cambió para siempre. Esto era un humedal y lo están convirtiendo en un campo”.

Los humedales cubren más del 20% de Argentina.

Son ecosistemas con agua superficial o suelos saturados con agua de forma temporaria o permanente, como bañados, esteros y bosques fluviales. Brindan importantes servicios ecosistémicos, desde mitigar sequías a absorber carbono.

En los últimos tres años, la isla donde vive Martín se incendió dos veces: en 2020 ardió su casa, el galpón donde guardaba sus herramientas y parte de sus colmenas. “Tuve que empezar de cero porque no me quedó nada”, recuerda. A finales de 2022, el fuego volvió y quemó toda su producción de miel. “Fue muy duro, todavía estoy intentando volver a producir porque perdí todas las abejas. El fuego me afectó la salud y el trabajo”, cuenta.

El Delta, con 1,7 millones de hectáreas de extensión, está siendo afectado por una histórica crisis de incendios que, en los últimos tres años, llegó también a los Esteros del Iberá, otro humedal en la provincia de Corrientes con 1,3 millones de hectáreas.

Los incendios afectaron a más de la mitad de la extensión del Delta en los últimos tres años. En los Esteros, ya ardieron más de 100 mil hectáreas en 2023.

Esto ha traído impactos negativos a los ecosistemas, sus suelos, hábitats y especies, mientras que la contaminación del aire y el humo han planteado graves problemas de salud pública para las ciudades ribereñas como Rosario, con un millón de habitantes. “La quema de humedales se configura como uno de los peores desastres ecológicos de la región y afecta gravemente la salud de nuestra población”, explica un documento de la facultad de medicina de la Universidad de Rosario.

Los incendios coinciden con una sequía histórica que ya lleva tres años en Argentina, cuyos efectos son potenciados por el cambio climático. Los prolongados periodos de sequía, combinados con una serie de intensas olas de calor, han creado las condiciones ideales para que se inicien —y propaguen— los incendios forestales.

Para organizaciones ambientales, los incendios son intencionales y tienen que ver con un cambio de uso del suelo provocado por la ganadería, que busca quemar la vegetación natural y reemplazarla por pasturas para las vacas. Para ordenar los usos de esos territorios, reclaman desde hace años la sanción de una Ley de Humedales que mejore la protección de esos ecosistemas.

DEMANDA DE CARNE, IMPULSO A LAS PASTURAS

La ganadería en los humedales es una actividad muy antigua en Argentina, un país con 53 millones de cabezas de ganado, según datos oficiales de stock bovino. El 71% del rodeo está en la región pampeana y la provincia de Entre Ríos —bajo cuya jurisdicción está el 80% de las islas que componen el delta del Paraná— tiene 2,8 millones de cabezas distribuidas en tierra firme y en zona insular, según el Censo Agropecuario de 2018.

Una parte importante del total de la producción ganadera del país, que en 2022 fue de alrededor de tres millones de toneladas, se exporta: el año pasado las exportaciones llegaron a 625.700 toneladas, un 9,5% más que en 2021. China es el mayor comprador y compró carne vacuna y huesos con carne por 485.700 toneladas en 2022, un 14,4% más que en 2021. Ocho de cada diez kilos de carne se dirigieron a China, con ingresos por 2.269 millones de dólares, según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes de la República Argentina (CICCRA).

Con el aumento de la demanda y la expansión de la producción, los humedales argentinos se han convertido cada vez más en pastizales, incluso en el marco de programas respaldados por el Gobierno nacional, lo que ha generado controversias y debates.

“La ganadería puede ser la actividad económica más adecuada en los humedales del Paraná, pero sólo si se hace de forma sustentable, no de forma industrial”, explica Rubén Quintana, biólogo y presidente de la Fundación Humedales, sede regional de la ONG Wetlands International.

La ganadería en los humedales cambió de escala en las últimas décadas. Luego de contar de explotaciones pequeñas o de subsistencia, la mayoría son hoy de tipo industrial.

También hubo un notable crecimiento de cabezas de ganado en los últimos años, correlacionado con el caudal del Paraná: como el río sufre prolongadas bajantes que alcanzaron los niveles más bajos en casi 80 años, nuevas tierras quedaron disponibles para los productores. Según datos del SENASA, el servicio nacional de seguridad agroalimentaria, el número de

cabezas de ganado en el Delta del Paraná creció un 46% entre 2017 y 2022, pasando de 130.992 a 191.662.

Para el ingeniero agrónomo Ernesto Massa, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el pico en la cantidad de hacienda en el Delta fue en 2007 con 1,5 millones de cabezas, una cifra que nunca se repitió y que oscila mucho. “Desde 2010 el stock está más bien a la baja, aunque es cierto que con la bajante del río subió la carga general de animales. Hoy estamos en un 60 o 70% de los niveles récord de 2007”, evalúa.

Algo parecido dijo Leonardo Scarparo, productor ganadero en esa zona. “Estamos al 10% de lo que fue la carga ganadera de los mejores momentos. Las islas estaban bastante vacías antes de los incendios”, dijo este empresario que trabaja 800 hectáreas con unos 200 animales, cuya carne va mayoritariamente a exportación.

FUEGO Y VACAS

Para organizaciones ambientalistas, los incendios en los humedales fueron mayormente originados por productores ganaderos para



La ciudad de Rosario envuelta en humo por los incendios en los humedales del Delta del Paraná, en septiembre de 2022 (Imagen © Sebastián Suárez Meccia / Greenpeace)

“limpiar” la vegetación seca durante el invierno y así permitir el rebrote de pasto para la hacienda en primavera, una práctica frecuente por parte de los productores.

“El avance de la frontera ganadera y la mayor cantidad de vacas en los humedales explican muchos incendios. Luego hay otros actores como los negocios inmobiliarios y también los cazadores furtivos de fauna silvestre”, dice Ivo Peruggino, de la Multisectorial de Humedales, una organización que reúne a ciudadanos y organizaciones sociales y ambientales.

Para académicos y técnicos, la respuesta del origen de los recientes incendios no es tan sencilla. “Es una suma de factores y no responsabilizaría sólo a los ganaderos, aunque muchos de ellos prenden fuego los campos y en estas condiciones ambientales excepcionales usar esa herramienta es mucho más grave”, subraya Quintana.

Desde su isla en Entre Ríos, Esteban Martín tiene su propia interpretación. “Antes el que prendía fuego era el islero, el habitante, pero ahora no, ahora cualquiera viene y prende y no les importa nada empezando por los que arrendan los campos para ganadería. En la isla donde estoy yo debe haber más de 3 mil animales”, cuenta.

Para Ernesto Massa que haya vacas no significa que sea malo porque están desde hace 250 años, aunque no con esta cantidad. “El fuego se usa para renovación de la vegetación, es una práctica cultural de manejo de pasturas que es barata y fácil, pero hay que

saber manejarla bien”, agrega.

Scarpato rechaza las críticas y sostiene que los incendios fueron intencionales para “generar un malestar social” con los productores.

EL ETERNO PROYECTO DE UNA LEY DE HUMEDALES

A la par de la crisis de los incendios, creció el reclamo a favor de la sanción de una Ley de Humedales como herramienta para ordenar los usos productivos del territorio. Pero por cuarta vez en una década, ese proyecto no avanzó en el Congreso argentino en 2022.

Para los ecologistas, los sectores con gran poder económico frenan cualquier posibilidad normativa: “el agronegocio corre permanentemente su frontera sin preocuparse por lo que deforesta. Esta conjunción de intereses contra la Ley de Humedales provoca que las resistencias políticas y mediáticas sean enormes. Son el lobby del fuego”, dice una carta pública de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Para las entidades agropecuarias, una ley así iría en contra de la producción y generaría más pobreza. En noviembre de 2022 publicaron un comunicado titulado “No hace falta otra ley de política ambiental” que señala que esa propuesta “atenta contra su actividad” y “pone en riesgo el arraigo rural y el desarrollo del país”.

Después de cuatro intentos fallidos, quienes han seguido de cerca el debate ven poco probable que el proyecto de Ley de Humedales vuelva a

discutirse en el Congreso este año. “Es un año electoral y no creo que ningún partido se ponga a ver esto. Tenía esperanzas que avanzara el año pasado, pero no”, admite Quintana.

PRODUCIR DE FORMA SUSTENTABLE, EL DESAFÍO

Desde la Fundación Humedales están trabajando junto a algunos productores para introducir prácticas más sustentables. Se propone un protocolo de trabajo que garantice la mejora ambiental de los predios ganaderos, incorporando un programa de monitoreo con evaluación de indicadores.

Aplicar mejores prácticas que incluyan mayor conservación del ecosistema es la clave. Para eso es importante que los productores puedan recibir una mayor retribución. “Pensamos en un sello distintivo que identifique a esa ganadería sustentable”, dice Quintana.

La ONG ya está trabajando con 12 establecimientos en diferentes puntos del Delta en temas como mantenimiento de pasturas, mejor calidad forrajera, manejo del suelo, el agua y la vegetación, control de la cantidad de animales y convivencia con la fauna silvestre.

“El modelo de ganadería extensiva implica una transformación drástica del humedal”, sostiene Quintana. “Hubo antes una ganadería tradicional de los humedales, pero probablemente tampoco sea lo más adecuado ahora. Hay que buscar modelos intermedios que permitan producir sin alterar la hidrología profunda del humedal”. 

Cofco: la falta de datos genera dudas sobre el origen de la soja brasileña



Árboles entre los campos secos de soja del Cerrado, en el estado brasileño de Goiás. Compuesta principalmente por sabanas, la región cuenta con menos protecciones gubernamentales y leyes internacionales que biomas como la Amazonía (Imagen: Trajano Paiva / Alamy)

A pesar de haber adquirido préstamos vinculados a objetivos de sostenibilidad, la agrícola china no da detalles sobre sus esfuerzos para combatir la deforestación en biomas como el Cerrado

Con ingresos de 53.000 millones de dólares, la empresa agrícola china Cofco International es una de las mayores procesadoras y comercializadoras de alimentos del mundo, y concentra el 60% de sus activos de cereales y oleaginosas en Sudamérica, en parte gracias a 3.000 millones de dólares en

préstamos vinculados a objetivos de sostenibilidad. Aunque ha crecido en la región con el apoyo de este tipo de financiación verde, la empresa ha proporcionado poca y opaca información sobre el progreso de sus compromisos medioambientales.

En 2020, Cofco International

prometió lograr para este año la trazabilidad total de sus proveedores directos de soja en Brasil, su principal socio en Sudamérica. El objetivo era garantizar que la empresa no compra soja cultivada en tierras que han sido deforestadas ilegalmente. A punto de cumplirse el plazo, la empresa parece afirmar que ha alcanzado el 80% de su objetivo, según su último informe de sostenibilidad publicado en junio. Pero esta información es solo una línea en un documento de más de 80 páginas, y hay pocos detalles de este progreso en sus plataformas digitales.

En otra parte del informe, Helen Song, directora financiera de Cofco International, afirmó que “cada año aumenta la proporción de materias primas con certificación sostenible en nuestra cartera”. La empresa continuó diciendo que había alcanzado “todos los objetivos sociales y medioambientales y de trazabilidad relacionados con los proveedores directos en relación con nuestro préstamo vinculado a la sostenibilidad”. Pero Diálogo Chino no pudo encontrar más información sobre los productos en el informe y en otras plataformas sobre a qué objetivos se refiere la empresa, ni sobre la proporción de materias primas certificadas en su cartera.

En 2021, durante la conferencia climática COP26 de las Naciones Unidas en Glasgow, Cofco International, junto con otras 11 empresas comerciales, firmó una declaración en la que se comprometía a elaborar un plan de acción para eliminar la deforestación de sus cadenas de producción. La propuesta se presentó en la siguiente cumbre, la COP27, y abarcaba la producción de soja en el Cerrado, la Amazonía y el Gran Chaco, con un objetivo fijado para finales de 2025. Sin embargo, el documento, aunque disponible en internet, no aclara qué acciones están llevando a cabo los firmantes para cumplir la promesa a corto plazo, aunque se dice que deben elaborar “planes de implementación” e informar de sus avances en la cumbre COP28.

“Las empresas comerciales pueden asumir públicamente compromisos en ecosistemas vulnerables, pero necesitamos ver los resultados que se producen sobre el terreno”, afirma André Vasconcelos, responsable de compromiso global de Trase, una plataforma de seguimiento de cadenas de suministro. “Tienen que ser más transparentes para que la sociedad pueda seguir sus esfuerzos; es una falencia de toda la cadena”.

Diálogo Chino se puso en contacto con Cofco International para pedir comentarios sobre sus esfuerzos de trazabilidad y la información que ha puesto a disposición del público, pero la empresa no respondió a las solicitudes. Agrosatélite, socio de la empresa china en el seguimiento remoto de explotaciones, tampoco respondió a las solicitudes de información.

RIESGO DE DEFORESTACIÓN

Los análisis publicados por Trase en marzo muestran que, en 2020, Cofco International se exponía al riesgo de haber comprado más de 12.000 hectáreas de soja de tierras entonces recientemente deforestadas, la mayoría en el Cerrado.

Al estar compuesto principalmente por sabanas, el Cerrado cuenta con menos protecciones legales tanto por parte del gobierno brasileño como de las leyes internacionales –como la recientemente aprobada ley contra la deforestación de la UE– que los biomas forestales, como la Amazonía.

No se trata sólo de un riesgo: una investigación de la plataforma de periodismo de investigación Repórter Brasil descubrió que, en 2021, Cofco había comprado soja procedente de zonas deforestadas del estado de Mato Grosso, que abarca tanto el Cerrado como la Amazonía, a través de proveedores indirectos. Se trata de operadores intermediarios, como cooperativas y depósitos de reventa, situados entre los agricultores y los grandes compradores: las propias empresas comercializadoras.

El Soft Commodities Forum (SCF), una red de empresas de comercio agrícola que pretende eliminar la deforestación en la cadena de suministro de soja del Cerrado, recopila y publica datos sobre los progresos realizados por los gigantes del cereal en la protección del bioma.

La organización da prioridad al seguimiento en lugares que

Más de **10,000 km²**

La superficie de sabana deforestada entre agosto de 2021 y julio de 2022 para la expansión agrícola en el bioma del Cerrado.



Imagen satelital que muestra explotaciones agrícolas en Chapadão do Céu, en el estado brasileño de Goiás. En estas zonas del Cerrado, las sabanas han sido sustituidas en gran medida por plantaciones de soja y algodón (Imagen: Oton Barros / INPE, CC BY-SA)

considera de alto riesgo de deforestación. Sin embargo, la deforestación avanza en un área mucho mayor: mientras que la organización sólo hace un seguimiento de 61 municipios productores en el Cerrado, los datos de la asociación brasileña de la industria del aceite vegetal ABIOVE muestran que 1.122 municipios del bioma registran cultivos.

“En la cosecha actual, nosotros [el sector de la soja] plantamos 21,4 millones de hectáreas en el Cerrado, lo que equivale a la mitad de la superficie plantada en Brasil”, declaró a Diálogo Chino Bernardo Pires, director de sostenibilidad de ABIOVE. “Prácticamente todo el Cerrado tiene condiciones favorables para el cultivo y, de hecho, es una expansión que debe ser controlada”, añadió. ABIOVE no hizo comentarios específicos sobre Cofco International.

El informe más reciente de SCF, de diciembre de 2022,

dice que Cofco monitorea el 100% de los proveedores indirectos hasta el primer punto de agregación (donde se mezclan granos de diferentes explotaciones, por ejemplo, en los silos de una cooperativa) en estos 61 municipios. Pero el documento no menciona cómo se hace, ni cómo se llegó a los resultados presentados.

El Cerrado ha perdido ya la mitad de su vegetación autóctona y sigue sufriendo una deforestación récord. Según Prodes, el sistema de monitoreo de deforestación del gobierno brasileño, la pérdida de sabana el año pasado fue la más alta desde 2015. En el último período de monitoreo de un año, entre agosto de 2021 y julio de 2022, se registró que la pérdida del bioma alcanzó más de 10.000 kilómetros cuadrados.

El Ministerio de Medioambiente y Cambio Climático de Brasil está

elaborando su Plan de Prevención y Control de la Deforestación y los Incendios en el Cerrado, que se someterá a consulta pública en septiembre.

MATO GROSSO, EL CENTRO DEL COMERCIO

Cofco International fue uno de los cinco mayores exportadores de soja de Brasil en 2020 y uno de los mayores exportadores de soja a China. Compra soja directa e indirectamente a productores rurales e intermediarios, como cooperativas. Esta se procesa en parte en las propias fábricas de la empresa comercial en el país, que luego envía harina y aceite de soja a distintos puertos de China a través de sus filiales.

Sin embargo, no es posible determinar el volumen de soja producido o exportado por Cofco International. Además del gran número de filiales implicadas, ninguna de ellas cotiza en bolsa, ni divulga voluntariamente esta información.

Cofco International afirma haber comercializado 127 millones de toneladas de productos básicos en 2022, pero no revela datos concretos sobre el desglose de estas transacciones. En su Informe Anual de Progreso para Miembros, publicado en la Mesa Redonda sobre Soja Responsable –la organización suiza que supervisa el comercio mundial de cereales y en la que participa Cofco–, la empresa china clasificó esta información como “sensible”.

Cruzando diferentes bases de datos, Trase estimó que

en 2020, Cofco International exportó más de 5 millones de toneladas de soja de Brasil, de las que algo más de 3 millones se destinaron a China y el resto a otros países, como Indonesia y Singapur.

La empresa opera en casi todos los 15 estados que son parte del Cerrado, incluido el Distrito Federal, y posee dos plantas de procesamiento y 18 silos en Mato Grosso. También tiene oficinas y agentes intermediarios que compran soja directamente a los productores, los llamados “originadores”, que operan en epicentros altamente productivos como Luís Eduardo Magalhães en Bahía, Sorriso en Mato Grosso y Balsas en Maranhão.

El corazón de las operaciones de la empresa china está en Mato Grosso, el estado con mayor producción agrícola de Brasil, y que tiene el 40% de su territorio cubierto por el Cerrado. Según personas familiarizadas con sus operaciones, la multinacional dispone de una red de silos en el estado con capacidad para almacenar 1,1 millones de toneladas de granos.

Estas operaciones no se producen sin importantes incentivos gubernamentales: nuestra investigación ha descubierto que Cofco International se beneficia de más de diez protocolos de exención fiscal, con exenciones de hasta el 85% sólo en el estado de Mato Grosso. Su infraestructura sigue ampliándose en el estado, incluso más allá del Cerrado y sus zonas de transición con otros ecosistemas.



Una encuesta realizada por FASE en la región de Matopiba mostró que los problemas a los que se enfrentan los agricultores de la zona derivan de la presencia de empresas extranjeras y el uso de pesticidas tóxicos (Imagen: Rosilene Miliotti / FASE, CC BY-NC)

LA SOJA DIFICULTA LA TRAZABILIDAD DE LOS CULTIVOS

El agricultor Cassimiro Pinheiro se ha sumado a los que han decidido invertir en este cultivo en Buritis, municipio de la región de Cerrado, en Minas Gerais. Desde hace seis años, solo planta soja.

“Aquí se ha convertido en una fiebre. Todo el mundo quiere plantar soja”, afirma Pinheiro, que añade que eludir la normativa medioambiental es una práctica habitual en la región. Aun así, no tienen muchos incentivos para dejar de hacerlo, porque “cuando [los agricultores] son multados, recurren a los tribunales unas cuantas veces y acaban pagando muy poco”.

Pinheiro suministra soja a la cooperativa Coagril, que vende a varias empresas. Sin embargo, no sabe si la entidad suministra a Cofco International. La cooperativa no facilitó esa información cuando Diálogo Chino se la solicitó.

El investigador estadounidense Donald Sawyer vive en Brasil desde hace unas cinco décadas y en 1990 ayudó a fundar el Instituto Sociedad, Población y Naturaleza (ISPN). No cree que sea posible hacer un seguimiento de los enormes volúmenes de soja transportados por todo el país. Señala el hecho de que el mayor productor de soja del mundo, Brasil, ha terminado de recoger la cosecha 2022/2023 y ha batido otro récord, con 154,6 millones de toneladas producidas. “¿Cómo vamos a saber de dónde viene cada bolsa?”, dice. “La deforestación hay que combatirla donde se produce –al final de la cadena de producción, en las plantaciones– y no en la ruta”.

“Creo que si las promesas de deforestación cero [por parte de las empresas comerciales] no se cumplen, algunos actores se desmoralizarán”, afirma. “Ciertos sectores tienen que tener cuidado con los gestos simbólicos, ya que pueden ser contraproducentes”.

La Niña termina, pero la sequía expone problemas más profundos en Argentina

Será la peor campaña de la soja en 23 años, ya que el deterioro del suelo agrava los efectos de la sequía

Al igual que hace 35 años, Gustavo Recupero recorre semanalmente 70.000 hectáreas en la región pampeana en el centro de Argentina. Como ingeniero agrónomo, asesora a productores de una de las zonas con mayor aptitud agrícola del país. “Jamás vi esto”, sostiene, refiriéndose a los efectos de una sequía que se prolongó durante las últimas tres temporadas.

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), desde mediados de 2020 la zona núcleo —en la que se concentra gran parte de la producción agropecuaria— acumuló un déficit hídrico equivalente al total de

lluvias de un año completo. El fenómeno generará pérdidas para la economía argentina en 2023 por 20.000 millones de dólares, lo que representa poco más del 3% de su Producto Bruto Interno.

La falta de humedad se debe fundamentalmente a la presencia, por tercer año consecutivo, de La Niña, un fenómeno climático de orden natural. Sin embargo, el cambio climático genera un escenario de mayor severidad. En un informe publicado en febrero, científicos de la organización World Weather Attribution advirtieron que el cambio climático no

genera pero sí agrava este período de sequía, que se ha sentido en toda América del Sur.

Además, el fenómeno se produce en el marco de un proceso de “deterioro físico de los suelos” a raíz del ritmo productivo actual, de acuerdo a Rubén Walter, director de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF).

Pero la persistencia de La Niña —que ha afectado a las ganancias de agricultores y comerciantes por la producción fallida— no ha sido el único factor que ha contribuido a estas pérdidas, según expertos como Rubén Walter, director de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF). La sequía, dice, ha golpeado en medio de un proceso de deterioro de los suelos debido a ciclos y prácticas de producción profundamente arraigados, que ahora la agricultura argentina está tratando de abordar para garantizar la sostenibilidad del sector.

UNA COSECHA PARA EL OLVIDO EN ARGENTINA

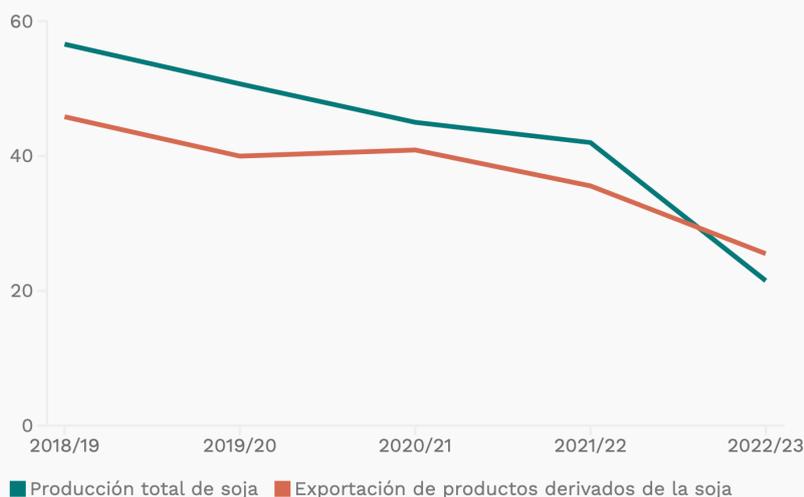
Por efecto de la sequía, la producción de los tres principales cultivos de Argentina —soja, maíz y trigo— en este ciclo



Plantas de soja secas en tierra también seca. Se prevé que la cosecha de soja de la campaña 2022/23 será la peor de Argentina en 23 años (Imagen: Rubén Walter)

Tercer año de sequía para la soja argentina

Producción y exportación de soja (en millones de toneladas)



Fuente de datos: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) (BCR) • Gráfico: Diálogo Chino
Nota: Los productos derivados de la soja incluyen porotos, harina, aceite y biodiésel.

rondará las 65 millones de toneladas, un 45% menos que un año atrás, de acuerdo a estadísticas de la Bolsa de Comercio de Rosario a las que accedió Diálogo Chino. La caída se siente especialmente en la oleaginosa, que vive su peor campaña en 23 años.

“Este año fue desastroso. Los mejores lotes rindieron 11 quintales por hectárea (una unidad utilizada en la agricultura, un quintal equivale a 100 kilos), pero tuve otros que rindieron apenas uno”, sostiene Valeria Caponi, productora sojera de Cañada de Gómez, localidad ubicada en la provincia de Santa Fe, donde el rendimiento histórico osciló siempre en los 35 quintales por hectárea. “Mi papá tiene 71 años y nunca vio una cosa así”, completa.

Los principales indicadores evidencian que la 2022/2023 será una campaña para el olvido. Quizás el dato más llamativo sea el de la superficie no cosechada, es

decir, el área que se sembró pero que directamente se perdió: 36,4 millones de hectáreas, tres veces más que el máximo anterior (2015/2016), de acuerdo a estadísticas de la Bolsa de Comercio de Rosario.

La caída de la producción tendrá un impacto significativo en los ingresos de comercio exterior de Argentina. Las estimaciones de la BCR indican que el país experimentará una disminución del 40% en los ingresos por exportación de soja, en comparación con el período 2021/22, lo que representa una pérdida de alrededor de 8.000 millones de dólares.

Entre los principales destinos del complejo sojero se destacan China —con el 90% de las exportaciones de porotos de soja— e India —principal comprador de aceite de soja—. En harinas y pellets, las exportaciones se encuentran más distribuidas: sobresalen Vietnam, Indonesia, Argelia y

países de la Unión Europea.

NO SOLO LA SEQUÍA

El argumento principal que explica la situación es la sequía, pero también influyen factores que refieren a un modelo productivo “tremendamente extractivo”, según describe el ingeniero agrónomo Gustavo Recupero. Asesor de la Sociedad Rural de Rosario, Recupero describe el escenario como “grave”, con un 30% de campos sojeros con rendimientos de entre 0 y 4 quintales por hectárea, cuando habitualmente esas cifras oscilaban entre 28 y 32, de acuerdo a un informe de su autoría.

Ruben Walter, director de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, coincide. “Desde hace unos diez años, observamos un proceso de deterioro físico del suelo. ¿Qué significa esto? Que la estructura física del suelo, su permeabilidad, el movimiento interno de las raíces, no está bajo las mismas condiciones que hace una década”, sostiene.

Para Sergio Montico, docente de Manejo de Tierras en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina está frente a un proceso de degradación del suelo que ya lleva décadas. “No hemos hecho las cosas bien en cuanto a las prácticas tecnológicas para mitigarlo”, asevera.

Productores agropecuarios consultados comparten

parcialmente esa visión, pero se defienden, planteando la dificultad de realizar las inversiones necesarias. “Son antieconómicas frente a la presión impositiva o la alteración de los mercados”, dijo uno que pidió no revelar su identidad. “Uno invierte en lo que va pudiendo, sinceramente”, planteó otro.

En noviembre de 2022, el Banco Mundial publicó un informe en el que recomendaba una serie de medidas al campo argentino, en el marco de las frecuentes sequías. Planteó que para garantizar la resiliencia del sector se debían adoptar técnicas climáticamente inteligentes, cultivos resistentes a la sequía y seguros basados en índices, bajo los cuales los pagos están relacionados con factores como los niveles de precipitaciones.

También están en marcha iniciativas para mejorar la gestión del agua, como el plan nacional del Gobierno argentino para ampliar los sistemas de riego sostenibles, lanzado en abril. En la actualidad, sólo se riega el 5% de los 42 millones de hectáreas agrícolas del país, y el plan pretende invertir 2.000 millones de dólares para duplicar esta superficie. Hasta ahora se han ejecutado proyectos que abarcan unas 160.000 hectáreas, pero se anunció nueva financiación que puede contribuir al ambicioso objetivo de extender los sistemas de regadío a 1,9 millones de hectáreas más.

“

No somos muy proclives en Argentina, en la forma en la que hacemos agricultura, a hacer previsiones, planificaciones, mitigaciones o adaptaciones

Sergio Montico

Docente de Manejo de Tierras de la Universidad Nacional de Rosario

“No somos muy proclives en Argentina, en la forma en la que hacemos agricultura, a hacer previsiones, planificaciones, mitigaciones o adaptaciones”, sostiene Montico, que trabaja hace más de tres décadas en prácticas de manejo y conservación de suelo. Walter coincide: “Hay una frase que suelo escuchar cuando voy al campo. Y bueno, el recurso aguantará, se suele decir”.

¿AGUANTARÁ EL SUELO?

Se espera que para la próxima campaña, que comienza en breve, la sequía ya sea una anécdota. Sin embargo, no será una temporada con un régimen hídrico estadísticamente ordinario. Tanto Mario Navarro, director del Observatorio Meteorológico de Salsipuedes en la provincia de Córdoba, como José Luis Stella, climatólogo del Servicio Meteorológico Nacional, coinciden en proyectar la llegada del fenómeno del Niño, que dejaría lluvias por encima de las normales.

Esto podría ser leído como una gran noticia para contrarrestar los tres años de sequía con la Niña. Sin embargo, las lecturas no son del todo lineales.

“No se puede pretender que en una o dos lluvias, en dos meses, tengamos otra vez el perfil de suelo en condiciones óptimas. Se va a recargar parcialmente el perfil, pero una buena parte del agua va a escurrir. Vamos a tener zonas con mucha agua corriendo y si hacemos mediciones del suelo, veremos que a los 80 o 90 centímetros vamos a registrar falta de agua”, sostiene el especialista Rubén Walter.

Con los suelos en sus condiciones “más secas de los últimos 30 años”, según revela Marina Barletta, analista de la Bolsa de Comercio de Rosario, el panorama para el agro argentino es aún incierto. Un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires advierte que, más allá de las intensas lluvias por venir, “no debe esperarse un alivio rápido”. 

La ley contra la deforestación de la UE, una prueba para la agricultura sudamericana

Los expertos creen que las nuevas normas ayudarán a los países exportadores, pero su cumplimiento podría plantear nuevos problemas y retos para el Mercosur



Una vaca en un campo de Cerquilho, en el estado brasileño de São Paulo. Las nuevas normas de la UE pueden prohibir el acceso de la carne vacuna sudamericana al mercado europeo si su producción está vinculada a tierras deforestadas (Imagen: Dan Agostini / Diálogo Chino)

A finales de junio entró en vigor la nueva legislación europea que prohíbe la importación de materias primas asociadas a la deforestación y las violaciones de los derechos humanos, y que podría afectar significativamente a los países dependientes de la agricultura del Mercosur, el bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La normativa se centra en la producción y las cadenas de suministro de aceite de palma, soja, ganado, madera,

cacao, café y caucho, así como derivados como muebles, chocolate y papel. Estas materias primas representan la mayor parte de la deforestación implicada en las importaciones de la Unión Europea (UE). Sin la nueva ley, según informa la propia UE, este tipo de importaciones podrían causar la pérdida de más de 248.000 hectáreas de bosque cada año, una superficie casi del tamaño de Luxemburgo.

La ley europea contra la deforestación se aplica a todos los países con los que

el bloque mantiene relaciones comerciales, pero podría tener un impacto particular en los del Mercosur, que cuenta con la UE como su mayor socio comercial y de inversión y el segundo en el comercio de bienes, solo por detrás de China. En 2021, las importaciones de la UE procedentes de los cuatro países del Mercosur ascendieron a 43.000 millones de euros (48.000 millones de dólares), el 20% de los cuales fueron productos vegetales como la soja y el café.

Expertos consultados por

Diálogo Chino creen que estas regulaciones comerciales más estrictas ayudarán a sanear las cadenas de suministro latinoamericanas, usualmente afectadas por impactos socioambientales negativos. Sin embargo, advierten que la ley podría crear nuevos problemas, como la migración de daños a biomas no cubiertos por la ley. Sectores del agronegocio y gobiernos del Mercosur, por su parte, han calificado la norma como proteccionista.

CÓMO FUNCIONA LA LEY DE DEFORESTACIÓN DE LA UE: LAS EMPRESAS EN EL CENTRO

Según la nueva legislación, las empresas que exporten a la UE tendrán que proporcionar información “concluyente y verificable” de que sus productos están libres de deforestación y cumplen con la legislación local de los países exportadores. Esto exigirá la trazabilidad de todos sus proveedores, con geolocalización de cada establecimiento por el que hayan pasado los productos.

La ley envía una “señal clara” de que el mercado sudamericano necesita actuar, afirma André Vasconcelos, responsable de participación global de Trase, una plataforma que se dedica a monitorear cadenas de suministro. “Algunas empresas ya tienen sus propios procesos de verificación, pero esto necesita ganar escala y ser más transparente”, agregó.

Un reciente análisis de Global Canopy, la organización impulsora de la iniciativa Trase, demostró que

las empresas que más deforestación provocan en las zonas tropicales no están preparadas para aplicar la nueva legislación, ya que más de tres cuartas partes de ellas no tienen un compromiso fuerte con la trazabilidad.

“Se trata de un ámbito en el que la UE puede y debe contribuir con recursos financieros, para que haya un reparto equitativo de los costos a lo largo de las

“

La evaluación del nivel de riesgo crea un incentivo para que los países adopten reformas y limpien sus cadenas de producción

Luciana Téllez
Human Rights Watch

cadenas”, afirma Vasconcelos. Las empresas tendrán 18 meses para adaptarse, a partir de la entrada en vigor de la ley a finales de junio, y las más pequeñas dispondrán de hasta dos años para prepararse, un proceso en el que, según la normativa, la UE prestará asistencia técnica.

Luciana Téllez, investigadora de Human Rights Watch que ha seguido el desarrollo de la nueva ley, señala que “su aspecto más fuerte es prohibir cualquier tipo

de importación vinculada a la deforestación”, independientemente de que sea legal o ilegal. Esto, dice, impide que un país ajuste sus normas para legalizar más deforestación, además de facilitar su aplicación.

La ley también ayudará a combatir las continuas violaciones de los derechos humanos vinculadas a la producción agrícola en Sudamérica, afirma Téllez: “Proporciona un mayor apoyo a los pueblos indígenas que reclaman sus derechos sobre la tierra y a la hora de exigir responsabilidades a las empresas que violan sus derechos”. Sin embargo, añade la investigadora, aún existen dudas sobre el reglamento que servirá de base para el seguimiento de estos casos.

Paralelamente, la UE llevará a cabo una evaluación de riesgos de los países exportadores antes de 2025, teniendo en cuenta datos como las tasas de deforestación y expansión agrícola, las tendencias de la producción y las violaciones de los derechos humanos, de acuerdo con “pruebas científicas y fuentes reconocidas a nivel mundial”, según el texto de la ley.

A partir de ahí, el bloque debe enumerar el grado de riesgo – bajo, estándar o alto– de cada país exportador.

“Esta evaluación crea un incentivo para que los países adopten reformas y limpien sus cadenas de producción, porque en el futuro la Comisión [de la UE] puede revisar y rebajar el índice de riesgo”, afirma Téllez.

El grado de riesgo impondrá más o menos rigidez en la vigilancia, por lo que algunos países ya han dejado claro que van a reaccionar si se los considera de alto riesgo. “La Comisión recibirá muchas presiones políticas de sus socios para que baje los riesgos de algunos mercados”, afirma Téllez.

BRASIL: ¿UN NUEVO RUMBO PARA LA GANADERÍA?

La agroindustria, encabezada por la producción de soja y carne vacuna, es el motor de las exportaciones brasileñas, y la UE es su segundo mayor cliente, solo superado por China. Pero este mismo sector también impulsa la destrucción medioambiental: en 2022, la agroindustria impulsó el 95,7% de la deforestación del país, casi toda ilegal, según MapBiomas.

La deforestación afecta a varias cadenas de suministro en Brasil, pero la ganadería es la más problemática, según los especialistas. Parte de la dificultad se debe al tamaño de esta industria, compuesta por 2,5 millones de propiedades diferentes, y a la complejidad de la cadena de suministro, que se divide en varias etapas: algunas granjas se especializan en la cría de ganado, mientras que otras lo sacrifican y exportan. Así, es habitual que un animal pase por varias propiedades diferentes antes de llegar al mercado.

Además de su tamaño y extensión, la cadena de suministro de la ganadería también carece de transparencia. Las autoridades controlan el sector mediante documentos oficiales completados

225 millones

El número de cabezas de ganado vacuno en Brasil es mayor que la población humana del país –de 203 millones– y supone un reto importante para los esfuerzos de trazabilidad.

por los propietarios rurales. La información es autodeclaratoria y, por lo tanto, depende de la buena fe del ganadero. Los mataderos también tienen sus propios sistemas de seguimiento, pero no divulgan sus datos

Estas fallas en el seguimiento pueden dar lugar al llamado “blanqueo de ganado”, es decir, cuando un ganadero multado por delitos socioambientales vende su producción a otra explotación, que luego se encarga de la mercancía con aparente legalidad.

Una serie de investigaciones, elaboradas por organizaciones ecologistas y medios de comunicación en los últimos años, ha demostrado que el ganado que venden los grandes mataderos procede a menudo de zonas deforestadas ilegalmente.

El ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, declaró recientemente que la trazabilidad total es un “camino inevitable”, porque “los pocos que cometen delitos ambientales contaminan todo el sistema”. En la actualidad, alrededor del 80% de la deforestación del país está asociada a los grandes ganaderos en las

últimas fases de la cadena de producción.

Frente a las presiones nacionales e internacionales, el sector muestra lentamente signos de estar avanzando. La Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) propuso un sistema voluntario para rastrear cada uno de los 225 millones de cabezas de ganado de Brasil, más que la población humana del país, de 203 millones.

Actualmente, según Burnier, la identificación individual sólo cubre el 2% del rebaño. No en vano, la CNA calcula que la adaptación llevará al menos ocho años, cinco veces más que el plazo fijado por la legislación europea. Además, los datos permanecerían bajo el control de la organización y no se harían públicos.

Sobre las relaciones de Brasil y el Mercosur con la UE, el presidente brasileño Lula ha apelado a la “confianza mutua, no a la desconfianza y las sanciones”. Tras reunirse en junio con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, el presidente afirmó que una ley cuyos efectos trascienden el territorio europeo traerá consigo “potenciales restricciones a

las exportaciones agrícolas e industriales brasileñas”.

ARGENTINA: PROGRAMA PILOTO CONTRA LA DEFORESTACIÓN

En otros países del Mercosur, los retos para cumplir la legislación europea son similares. En Argentina, la producción de carne vacuna y soja, destinada en gran parte a la exportación, fue la principal responsable de la pérdida de 7 millones de hectáreas de bosques en las dos últimas décadas.

La soja es el principal producto básico de exportación de Argentina, la mayor parte en forma de harina de soja, y sus principales compradores son India, China y los Países Bajos. Europa es el principal destino de la carne vacuna refrigerada del país, aunque China es el mayor comprador de carne vacuna congelada.

Patricia Bergero, subdirectora de estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), explica que el 87% de la producción de soja del país se exporta, por lo que la legislación europea “no es poca cosa.”

“Sin dudas habrá cambios para los productores, especialmente con la identificación o georreferenciación de la propiedad de origen del grano”, dice Bergero. “Esto atravesará toda la cadena de valor de las oleaginosas”.

En cuanto a la carne vacuna, Fernando Storni, presidente de la Mesa Argentina de Carne Sustentable (MACS), añade que el país “necesita una mejora decisiva del actual sistema de trazabilidad”. Pide, por ejemplo, el uso obligatorio de la identificación electrónica de los animales.

Desde 2020, la provincia de Santa Fe está probando un programa piloto en este sentido. Hasta la fecha, 108 de los 26.000 ganaderos de la región se han apuntado al seguimiento, con imágenes por satélite disponibles en una plataforma digital.

“Algunos productores no están preparados, por eso trabajamos con ellos en la capacitación”, dice Pablo Fiore, director de producción pecuaria y avícola de Santa Fe. “Por ahora, el programa es voluntario, pero los que no se sumen tendrán menos

posibilidades de exportar”.

Juan Carlos Cotella es director de Aapresid, una asociación de productores de soja, y miembro de VISEC, una plataforma que certifica a los productores del Gran Chaco, un bioma muy afectado por el avance de la deforestación.

En el Chaco se produce el 13% de la soja argentina, pero pocos agricultores adoptan la trazabilidad, señala Cotella. “Queda mucho trabajo por delante y no está claro cómo se llevará a cabo en el territorio”, añade.

PARAGUAY: IMPACTOS INCIERTOS

Paraguay es el país del Mercosur que menos productos agrícolas exporta a la UE, pero sigue siendo un proveedor importante. En 2020, Paraguay envió al bloque europeo el 6% de toda su producción agrícola, incluida la soja y la carne.

Guillermo Achucarro, investigador paraguayo sobre cambio climático de Base Investigaciones Sociales (Base-IS), celebra la aprobación de la ley antideforestación, pero teme que tenga poco efecto en un país que se enfrenta a un lobby “agroindustrial avasallador” y a un intercambio comercial relativamente bajo con la UE.

El ministro de Agricultura de Paraguay, Moisés Bertoni, afirma que el país, al igual que otras naciones de la región, ya cuenta con su normativa interna para garantizar que el comercio de alimentos se desvincule de la deforestación.

“

Sin dudas habrá cambios para los productores, especialmente con la identificación o georreferenciación de la propiedad de origen del grano

Patricia Bergero

Bolsa de Comercio de Rosario

“Tenemos partes del país con deforestación cero desde 2005, mientras que en otras, cada productor protege el 50% de su superficie”, dice Bertoni. “Nos preocupa cómo se aplicará la reglamentación y que acabe excluyendo a los pequeños productores”.

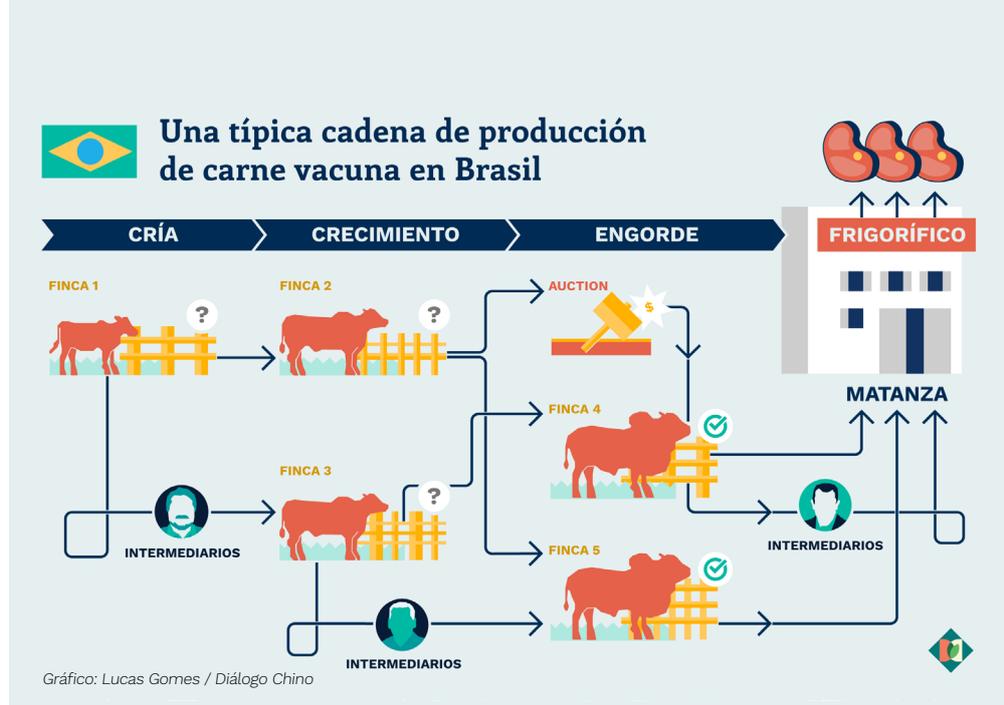
URUGUAY: UN EJEMPLO DE MONITOREO

Luciana Téllez considera que Uruguay es el país sudamericano más preparado para cumplir las exigencias de la legislación contra la deforestación. Según ella, su sistema de trazabilidad del rebaño bovino ya es obligatorio, además de “transparente y bien regulado”.

Desde 1998, el programa de trazabilidad del país está reconocido por la UE. Y en 2004, el país inició el seguimiento individual de bovinos, que más tarde se convirtió en el Sistema Nacional de Información Ganadera.

“La trazabilidad del ganado vacuno en Uruguay permite seguir la trayectoria del animal desde su nacimiento hasta el sacrificio, aportando datos como la fecha y lugar de nacimiento, sexo, raza, movimientos y cambios de propietario”, explica Jorge Acosta, ingeniero agrónomo del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En este proceso, cada bovino recibe una especie de aro o pendiente, que identifica su numeración, y un radiotransmisor, que almacena información del animal y sus movimientos en una base de datos.



“

Esperamos que las revisiones reconozcan la gran importancia ecológica de las sabanas arbóreas, los pastizales y las llanuras aluviales

André Vasconcelos

Trase

Desde 2007, todos los productores uruguayos también han adoptado un sistema que controla a los animales en cada etapa de la cadena y en los mercados nacionales o internacionales.

La carne vacuna es el principal producto de exportación de Uruguay. En 2022, la UE compró el 12% de la producción, todavía muy por debajo de la parte destinada a China, del 58%. La soja uruguaya, por su parte, aunque ha aumentado su mercado de exportación, ha ido abandonando las góndolas de la UE: el bloque redujo sus compras al país en un 93% en la última década.

Por lo tanto, la nueva legislación debería introducir menos cambios en las cadenas de producción uruguayas. Otro factor que reduce su influencia en el país es que los pastizales, su bioma predominante, no están cubiertos por la regulación europea.

“Su énfasis está claramente en la Amazonía brasileña, así que aún veremos qué ocurre con otros bosques”, afirma Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES).

Información adicional proporcionada por Yedan Li.



Producción de pulpa de fruta en la Reserva Forestal Nacional de Tapajós, estado de Pará, Brasil (Imagen: Flavio Forner / ASL Brasil, CC BY NC)

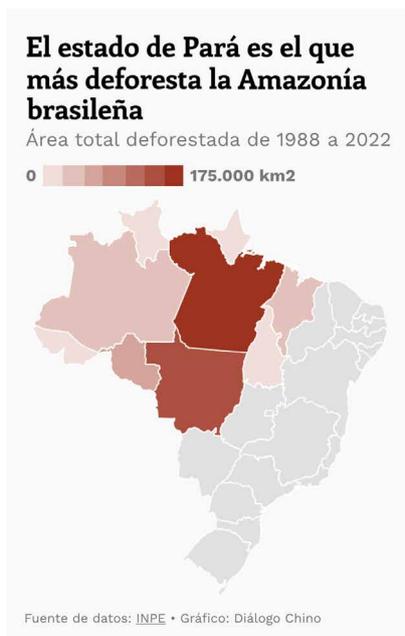
[Kevin Damasio](#)

¿Puede un foco de deforestación de Brasil convertirse en un líder ambiental?

Presionado tras acumular récords de deforestación amazónica, el estado de Pará apunta ahora a la bioeconomía

São Félix do Xingu, en el estado amazónico de Pará, es un lugar de superlativos: es el segundo municipio con mayores emisiones anuales de gases de efecto invernadero de Brasil, el segundo con mayor tasa de deforestación en los últimos 15 años y el municipio con el mayor número de ganado del país. También tiene uno de los niveles de desarrollo más bajos de la región.

Este municipio es también una especie de símbolo de la situación general de Pará. El estado encabeza el *ranking* de deforestación en la Amazonía desde 2006, impulsada por la expansión



de la ganadería, el cultivo de soja y la construcción

de carreteras y puertos para facilitar el flujo de la producción a los mercados nacionales e internacionales.

Pero en medio de la creciente presión para revertir la destrucción de la Amazonía y la elección del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometió dar prioridad en su agenda a las cuestiones medioambientales, hay indicios de que Pará podría estar intentando convertirse en un estado más ecológico.

En noviembre de 2022, el gobernador de Pará, Helder Barbalho, formó parte de la comitiva de Lula en la cumbre del clima COP27 de las Naciones Unidas en Egipto, donde Brasil manifestó su intención de que la COP30 se celebre en la Amazonía brasileña en 2025. Si el país es seleccionado, Belém, la

capital de Pará, acogerá el evento. Barbalho también aprovechó su participación en la conferencia para presentar el Plan de Bioeconomía de Pará (PlanBio), que tiene como objetivo reducir a cero las emisiones derivadas del uso de la tierra en el estado para 2036.

El plan se centra en evitar la deforestación valorando, restaurando y promoviendo el uso sostenible de sus recursos biológicos —especialmente sus bosques— como parte de una “bioeconomía”. Pará prevé invertir 1.200 millones de reales (244 millones de dólares) en iniciativas relacionadas con la biodiversidad en los próximos cinco años, y calcula que su bioeconomía podría generar ingresos anuales de unos 170.000 millones de reales (34.500 millones de dólares) en 2040, aproximadamente el equivalente a su PIB actual.

La iniciativa no tiene precedentes a nivel gubernamental, ya que los proyectos que impulsan la bioeconomía han sido dirigidos en gran medida por organizaciones ecologistas y comunidades tradicionales a menor escala.

¿Está a punto de cambiar el modelo económico del estado y su imagen de gran deforestador?

Para Celma de Oliveira, coordinadora de proyectos de la organización ecologista Imaflora y residente en São Félix do Xingu, hay avances prometedores tanto a nivel federal con la elección de Lula, como a nivel estatal con el PlanBio.



Ganadería en una zona deforestada ilegalmente en la selva de Jamanxim, en el estado de Pará, en la Amazonía brasileña (Imagen: Ricardo Funari / Alamy)

“Hay esperanza con esta reanudación de un gobierno más participativo y de ministerios y consejos que fueron desmantelados”, dice de Oliveira, refiriéndose al vaciamiento de organismos ambientales visto durante la presidencia de Jair Bolsonaro (2019-2022). “Ahora, la sociedad civil necesita participar en la gestión para que funcione”.

GANADERÍA, SOJA Y PRESIONES SOBRE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

La ganadería y la soja dominan cada vez más el paisaje de Pará, con pastos y plantaciones cada vez más extensos a expensas de los bosques del estado.

Los cultivos de soja ocuparon 849.000 hectáreas de tierra en Pará en 2022, un aumento del 70% sobre el área plantada en 2017. Mientras tanto, el estado tiene el segundo mayor rebaño bovino del país, con 26,7 millones de cabezas y una tasa de 1,5 cabezas por

hectárea, considerada de productividad relativamente baja.

“La productividad ganadera de Pará es muy baja y habría que mejorarla drásticamente para evitar que tenga que crecer cada año por la expansión de la tierra”, afirma Sérgio Leitão, fundador y director ejecutivo del Instituto Escolhas, que realiza estudios centrados en el desarrollo sostenible.

En medio de esta continua expansión, muchos pequeños agricultores de Pará están haciendo todo lo posible para resistir la tentación de dedicarse a la producción de soja y ganado, y deforestar en consecuencia.

Maria Josefa Neves, de 51 años, posee una propiedad rural en la comunidad de Tancredo Neves, a 120 kilómetros del centro de São Félix do Xingu. En una de sus 12 hectáreas, en terrenos que antes eran pastos, practica la agrosilvicultura, plantando diversos cultivos



Producción de cacao en la comunidad de Tancredo Neves, estado de Pará, Brasil (Imagen: Diego Formiga / Imaflora)

“

Los agricultores no consiguen generar ingresos suficientes para diversificar su producción

autóctonos como mandioca, cacao y acerola, una fruta parecida a la cereza.

En el resto de la propiedad, Neves deja que se regenere la vegetación natural. “Vivo en medio del monte, y los monos se acercan hasta el borde de la casa”, dice.

Sin embargo, la zona en la que vive está totalmente deforestada.

Neves es presidenta de la Asociación de Mujeres Productoras de Pulpa de Fruta (AMPPF), fundada en 2012. Cultiva guandules — una leguminosa similar a las arvejas— y frutas en paralelo con otros árboles, adoptando técnicas que aprovechan la sombra y ayudan a garantizar los nutrientes necesarios para el suelo sin aplicar productos químicos, sino haciendo uso de biofertilizantes caseros. Neves suministra pulpa de fruta a las escuelas de la región.

La AMPPF cuenta con 55 miembros, que desde hace

tres años venden su pulpa de fruta al gobierno federal, que a su vez la distribuye. La asociación ha progresado mucho: su contrato con las autoridades ha ascendido este año a 351.000 reales (71.000 dólares), frente a los 231.000 reales (47.000 dólares) de 2022.

Sin embargo, para crecer y abrirse a nuevos mercados, la asociación necesita inversiones. Por ejemplo, actualmente solo dispone de una pequeña cámara frigorífica para almacenar su producción y un camión refrigerado para transportarla.

Celma de Oliveira afirma que la falta de políticas públicas específicas inhibe la expansión de productores agroecológicos como la AMPPF, y que uno de los principales problemas a los que se enfrentan estas iniciativas es la dificultad para acceder a créditos.

“Hay créditos específicos para el sistema agroforestal,

pero los bancos ponen una serie de trabas, por lo que los agricultores no consiguen generar ingresos suficientes para diversificar su producción”, explica de Oliveira, que presta asistencia a la AMPPF a través de Imaflora. Añade que es “mucho más fácil” obtener créditos para la ganadería.

El secretario de Medioambiente del estado de Pará, José Mauro O’de Almeida, coincide en que es necesario crear mejores condiciones para que estos productos se comercialicen: “Tenemos buenas iniciativas en agroforestería, biojoyería, biocosmética, bioproductos en general, pero no están ganando escala”.

Para ello, Almeida afirma que es necesario mejorar las infraestructuras, la logística y la industrialización, manteniendo el procesamiento del producto en la región. “En París se puede comprar açaí liofilizado en polvo a 200 euros el kilo.

Tiene un alto valor añadido —mucho mayor que la soja— pero es necesario que haya industrialización”, afirma.

Se espera que el PlanBio responda a algunas de estas demandas en un intento de limitar la expansión de la frontera agrícola, afirma O’de Almeida. El plan subraya la importancia de un modelo económico sostenible y prevé la creación de “centros de emprendimiento” en cinco regiones del estado, así como un “museo de la bioeconomía” y una “escuela del conocimiento forestal”.

Según el secretario, parte de la primera financiación de estas iniciativas podría proceder del Banco Interamericano de Desarrollo, que aportará 300 millones de dólares a proyectos en materia de clima y descarbonización. Se espera que el primer plazo se pague en octubre, aunque aún no se ha definido la cantidad destinada específicamente al PlanBio.

EL GOBIERNO ESTATAL JUEGA A DOS PUNTAS

A pesar del giro ecológico señalado en recientes anuncios, es probable que el agronegocio siga siendo una industria clave y una fuente vital de ingresos para Pará y su gobierno, y una posible fuente de tensión con sus ambiciones bioeconómicas.

En 2022, las exportaciones agrícolas del estado alcanzaron un valor de 3.000 millones de dólares, un 70% más que el año anterior. Las principales materias primas fueron la soja, la carne vacuna y productos

forestales como madera, carbón vegetal y papel.

Según datos del Ministerio de Agricultura, China fue el principal destino internacional de la agroindustria paranaense, seguida de Estados Unidos, Holanda y España. El país asiático concentró 957 millones de dólares de exportaciones — un tercio del total— y la carne y la soja representaron el 92% de este valor.

En abril, el gobernador Barbalho se unió a Lula durante su visita de Estado a China, donde se firmó un acuerdo para la construcción de una línea férrea que conectará el sudeste de Pará con el puerto de Barcarena, en la costa norte del estado. El proyecto, que será construido por la China Communications Construction Company (CCCC), ayudará a transportar materias primas a los mercados internacionales, incluida China, y supondrá una inversión estimada de 7.000 millones de reales (1.400 millones de dólares).

Mientras tanto, las empresas ganaderas del estado recibieron casi 210 millones de reales (42,6 millones

de dólares) en exenciones fiscales en 2021. Pero la actividad, dice Leitão, “recibe mucho y ofrece poco en términos de productividad y eficiencia desde el punto de vista ambiental”.

En 2021, el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Pará procedía del cambio de uso del suelo, principalmente de la deforestación impulsada por la expansión de la agricultura, y el 11% procedía directamente de las propias actividades agrícolas y ganaderas, según datos del Observatorio del Clima, una red brasileña de ciencia climática. Altamira, también en Pará, y São Félix do Xingu son los municipios con mayores emisiones de gases de efecto invernadero de todo el país.

Altamira también alberga la Reserva Extractiva de Riozinho do Anfrísio, una zona protegida de producción sostenible que forma parte del territorio del pueblo indígena Xingu. Al igual que los productores de pulpa de fruta de São Félix do Xingu, los trabajadores de Riozinho do Anfrísio sufren la presión del avance de la deforestación.



Damião Barborsa en su vivero de la comunidad de Xadá, estado de Pará, Brasil (Imagen: Flavio Forner / ASL Brasil, CC BY NC)



En el territorio Xingu, casi mil productores han generado 1,9 millones de dólares a través del comercio de bioproductos desde 2016 (Imagen: Rafael Salazar / Origins Brasil)

La expansión del desmonte hacia la reserva, donde se cosechan castaña, aceite de copaiba y caucho, se ha convertido en una gran preocupación para Pedro Pereira, uno de sus residentes. Pero en los últimos meses ha notado una disminución del número de invasiones del territorio, posiblemente como resultado de los esfuerzos del nuevo gobierno de Lula por reanudar la lucha contra los delitos medioambientales. En abril, el gobernador Barbalho y Marina Silva, ministra de Medioambiente de Brasil, firmaron un acuerdo de cooperación para mejorar la aplicación de la legislación medioambiental, la gestión forestal y el uso del suelo en Pará.

Los productores de Riozinho do Anfrísio han demostrado que es posible generar ingresos manteniendo la selva en pie. Con el apoyo de Origins Brasil —una red coordinada por Imaflores y la ONG Instituto Socioambiental (ISA) que fomenta los negocios sostenibles en la Amazonía— han negociado mejores condiciones con las empresas que compran sus productos. No solo obtienen precios más justos, sino que las empresas

también cubren los costos logísticos del negocio.

“Antes, el caucho costaba 70 centavos [0,14 dólares] por bloque, y hoy cuesta 13 reales [2,64 dólares], un cambio enorme, y con un contrato que nos da seguridad”, afirma Pereira.

En el territorio Xingu, Origins Brasil cuenta con casi mil productores registrados que, desde 2016, han generado colectivamente 9,5 millones de reales (1,9 millones de dólares) a través del comercio de sus bioproductos. Solo en 2022, los ingresos fueron de 2 millones de reales (400.000 dólares).

Pero estos ingresos podrían ser mucho mayores, según un reciente estudio del Instituto Escolhas, que evaluó los posibles ingresos de la recuperación de áreas degradadas y, por lo tanto, de la plantación de especies autóctonas que podrían ser aprovechadas por los productores.

La investigación estimó que la reforestación de 6 millones de hectáreas, un área aproximadamente del tamaño de Croacia,

podría crear 1 millón de empleos directos, generar 13.600 millones de reales (2.700 millones de dólares) en ingresos y reducir el índice de pobreza en Pará en un 50%. Los empleos serían generados por la mano de obra en la recolección de semillas, producción de plántulas, plantación, mantenimiento y seguimiento de la actividad.

Según Leitão, del Instituto Escolhas, un cuello de botella muy discutido de la bioeconomía es el bajo nivel de productividad. Pero señala que la reforestación de bosques junto con otras actividades de menor impacto, como la horticultura producida por la agricultura familiar, podría ampliar su alcance. “Esto crea un espacio para el empleo, la generación de ingresos y la lucha contra la pobreza, y el tiempo necesario para que aparezca la escala de otras actividades”, afirma Leitão.

Pedro Pereira también está entusiasmado con las perspectivas a futuro. Su principal reto ahora no son los invasores de tierras, sino la expansión de su producción. Espera que su comunidad pueda negociar con más empresas para vender el excedente de producción. Pero, para él, la preservación del medioambiente va más allá de una oportunidad comercial.

“El bosque lo es todo para nosotros”, dice Pereira. “Es de donde sacamos el sustento para nuestra familia, toda nuestra comida, nuestro dinero. Es nuestra fuente de agua. Sin el bosque, no somos nadie”. 🌿

China reduce las importaciones de soja y plantea interrogantes para América del Sur

China ha sido el principal mercado en impulsar la demanda mundial del poroto de soja, pero planes oficiales ahora buscan aumentar la producción a nivel doméstico

China es el principal importador de soja a nivel mundial, pero la dinámica cambiante de la agricultura y las tendencias comerciales a largo plazo plantean dudas para los países productores de América del Sur, que llevan años exportando al país asiático de manera sostenida.

Después de dos décadas de aumentos casi constantes, las importaciones de soja de China han experimentado caídas periódicas e

interrupciones desde 2019, vinculadas a los efectos de la pandemia de Covid-19 y los brotes de peste porcina africana en la industria china de la carne de cerdo, uno de los principales destinos de la soja como alimento para animales. Mientras tanto, algunos analistas creen que las importaciones de soja de China ya pueden haber tocado su techo.

Estas tendencias coinciden con los planes oficiales

de China de aumentar la producción nacional de soja y reducir la dependencia de las importaciones, en el marco de una campaña más amplia de seguridad alimentaria nacional. Esto podría ser una señal de alarma para países como Brasil y Argentina, que encuentran en China su principal comprador.

En 2022, la demanda total de soja de China fue de un poco más de 115 millones de toneladas, más del 80% de las cuales se cubrieron con importaciones, según datos oficiales chinos. La producción nacional de soja alcanzó los 20 millones de toneladas el año pasado, y el gobierno se ha fijado como

Máquinas cosechadoras de soja en la provincia de Heilongjiang, China. El país planea aumentar la producción nacional de soja y reducir su dependencia a las importaciones (Imagen: Alamy)



objetivo una producción de más de 35 millones de toneladas en 2032 para reducir esta dependencia.

Los cambios son advertidos por diferentes informes comerciales, pero agentes clave de la agroindustria en Sudamérica afirmaron a Diálogo Chino que este escenario no genera mayores preocupaciones, al menos en el corto plazo.

“No parece probable que China pueda aumentar considerablemente su propia producción por la escasez de agua en su territorio y la falta de nivel técnico y maquinaria adecuada por parte de los productores”, sostuvo Rodolfo Rossi, titular de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (AcSoja). En la misma línea, desde la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales de Brasil expresaron que “la situación no se ve como una preocupación”.

Mientras tanto, los entrevistados plantearon otros desafíos en el mercado mundial de soja que sobrevendrán en los próximos años. Entre ellos, las consecuencias de la creciente producción brasileña y el fuerte incremento del *crushing* (el proceso de conversión de soja en los subproductos) en Estados Unidos.

DESACELERACIÓN DE LA DEMANDA

A principios de siglo, cuando importaba más de 10 millones de toneladas de poroto de soja, China representaba el 25% de las compras mundiales de

ese producto. Dos décadas después, las cifras se han multiplicado varias veces: en los últimos cinco años, sus importaciones oscilaron entre 88 y 100 millones de toneladas, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, lo que supone alrededor del 60% del comercio mundial.

“China ha sido el gran mercado que ha impulsado la demanda mundial de poroto de soja”, definió Gustavo Idigoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales (CIARA – CEC).

En ese proceso, Brasil y Argentina, dos de los principales productores de la oleaginosa, se han beneficiado enormemente, llegando al punto en que China se ha convertido en el principal destino de sus exportaciones de soja: más del 90% de los despachos de Argentina y el 70% de los de Brasil se dirigen allí.

Sin embargo, en los últimos años, la situación experimentó cambios significativos. En el futuro, diversas razones anticipan una disminución en el ritmo de las importaciones.

“Las compras de soja por parte de China disminuirán hacia 2030 como resultado de un crecimiento más lento de la producción ganadera, la mejora continua en las prácticas agrícolas y la adopción generalizada de una baja tasa de inclusión de harina de soja en las fórmulas de alimentos”, señaló un reciente estudio de Rabobank.

Según el reporte, esto tendrá “profundas repercusiones en toda la cadena de suministro mundial”.

Otro de los factores que influyen en esa dinámica son los planes oficiales para aumentar su producción doméstica de soja, que en 2022 alcanzó las 20 millones de toneladas. Su catorceavo plan quinquenal (2021-2025) tiene como meta llegar a 23 millones de toneladas de soja para 2025, mientras que el informe de perspectivas del Departamento de Agricultura establece un objetivo de producción de soja doméstica de 36,75 millones de toneladas para 2032.

También es relevante considerar lo que sucede con las harinas, dado que el destino final de la soja es su molienda, principalmente para alimentación animal. “En los últimos años se ha verificado una diversificación en China, donde el crecimiento en la demanda de harina de colza, maní y girasol ha sido más acelerado que el de la soja”, explicó Bruno Ferrari, analista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Ferrari indicó que, si bien es cierto que hay una ralentización en el crecimiento de la demanda de harinas en China en general, la de soja se ha ralentizado mucho más, mientras que otras comienzan a crecer un poco más rápido o mantienen su dinamismo. “Eso le quita un poco de espacio a la soja”, añadió.

Lo explicado por el ejecutivo de la BCR encuentra respaldo en los planes oficiales: según informó

Reuters en abril, el Ministerio de Agricultura chino emitió un plan de acción para reducir el uso de harina de soja en la alimentación animal, proponiendo que su proporción se reduzca del actual 14,5% a menos del 13% para 2025.

Esa hoja de ruta “orientaría a la industria alimenticia a reducir la cantidad de harina de soja, promoviendo el ahorro y la reducción del consumo de cereales forrajeros y contribuiría a garantizar el suministro estable y seguro de cereales y de importantes productos agrícolas”, sostiene el comunicado del ministerio.

SIN MAYORES IMPACTOS

Aunque los entrevistados coincidieron en señalar que existe una ralentización de la demanda de soja por parte de China, ninguno expresó que la situación vaya a generar cambios bruscos en las dinámicas exportadoras de Argentina y Brasil.

“No creo que debamos esperar muchas implicancias para ambos países como consecuencia de los cambios en la demanda de soja por parte de China”, dijo Gabriel Medina, docente de la Escuela de Agronomía de las universidades de Brasilia y Goiás.

La visión del académico es compartida por Sávio Pereira, director del departamento de Análisis Económico y Políticas Públicas del Ministerio de Agricultura de Brasil: “No nos preocupa”, sostuvo, porque, entre otros factores, “la idea de cambiar la forma de alimentar a los

animales no creemos que pueda darse a corto plazo”.

Idígoras, referente de las principales industrias exportadoras de Argentina, expresó que si bien “hay análisis que indican que China puede estar llegando a una meseta en su demanda incremental de soja”, estos deben tomarse “con cautela”. Agregó que “China es un importador estructural de poroto de soja y seguirá siéndolo”.

Las respuestas brindadas para este artículo se justifican mayormente en que los objetivos de producción de China “no mueven el mercado de la importación” -según aseveró el analista de la BCR Bruno Ferrari-, pues se trata de un incremento marginal en relación al volumen total. “La brecha sigue siendo muy grande”, agregó Medina.

Para Rodolfo Rossi, quien representa a los actores de la cadena sojera en Argentina, “no será fácil para

China lograr sus previsiones debido a la falta de mejoras en las eficiencias locales”. El empresario completó diciendo que el país aún tiene déficit hídricos considerables y que los productores locales “no tienen el nivel técnico ni la maquinaria adecuada”.

Reportes de terceros países avalan la visión de los entrevistados. En un artículo reciente, el Instituto Australiano de Políticas Estratégicas señaló que “las necesidades contrapuestas por el uso de la tierra, incluso para otros cultivos como el trigo y el maíz, dificultan que China escape de su dependencia de las importaciones de soja”.

EXCEDENTES PRODUCTIVOS DE SOJA EN AMÉRICA DEL SUR

Ahora bien, ¿qué pasará con la creciente producción de soja en Brasil? Según las últimas estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por



Un trabajador en una granja porcina de la provincia china de Guangdong. Uno de los principales usos de la soja importada en China es la alimentación animal. (Imagen: Amanda Ahn / Alamy)

sus siglas en inglés), para la campaña 2023/24 se espera un aumento del 5,2%, pasando de las actuales 156 millones de toneladas a 163. “Y todavía tenemos muchas áreas nuevas disponibles para plantar”, agregó Pereira, funcionario del gobierno brasileño.

Para Ferrari, el excedente generado por los productores de Brasil se destinará a la industria local: “El país tiene formas de seguir generando encadenamientos productivos virtuosos a nivel interno para introducir esa mercadería y es posiblemente el camino que sigan a futuro”, estimó.

En el caso de Argentina sucede algo similar. Gustavo Idígoras explicó que “existe una estrategia distinta a la de Brasil, no enfocada en vender directamente a China, sino en vender productos procesados al resto de los países”. En efecto, el país exporta grandes cantidades de harinas y aceites a países como India o Vietnam. Así, según el empresario, los

potenciales aumentos de producción se destinarán a la industria local, que viene trabajando muy por debajo de sus posibilidades.

Vale decir que Argentina, a diferencia de su país vecino, no prevé fuertes subas en su producción local, al menos en el corto plazo. Es más: desde el pico histórico de la campaña 2014/15 -cuando se superaron las 60 millones de toneladas-, las cifras tendieron a descender. El actual ciclo agrícola marcó el peor registro del siglo, con apenas 20 millones de toneladas.

Además de esta diferencia, los dos países tienen divergencias en lo que se refiere al destino de su producción. Si bien ambos tienen un mercado perfil exportador, Brasil exporta la mayor parte de su producción como grano, en tanto que Argentina lo hace con valor agregado (harinas y aceites).

Que destine gran parte de su producción a la exportación

directa no quiere decir que Brasil no sea un jugador central en el mercado de los productos elaborados. De hecho, este año, todo indica que se erigirá como el principal productor de harina de soja, desplazando a Argentina por primera vez desde mediados de la década de 1980.

Para Argentina, la fuerte competencia de Brasil es solo uno de los desafíos en el corto plazo. Rodolfo Rossi, representante de los actores de la cadena en ese país, advierte, que también Estados Unidos prevé un incremento “significativo” del procesamiento de soja. “De todas formas, hay oportunidades en nuevos mercados de África y algunos países de América Latina”, expresó.

Así, mientras la búsqueda de una mayor autosuficiencia por parte de China en la producción de soja probablemente lleve tiempo y enfrente diversos obstáculos, Brasil y Argentina cuentan con oportunidades para seguir siendo actores relevantes en el mercado global. La diversificación de mercados, el enfoque en la industria local y la exploración de nuevos destinos de exportación serán áreas importantes que su agroindustria deberá explorar.

Pero en un panorama mundial cambiante, y en medio de una creciente crisis climática, la industria de la soja de ambos países puede necesitar mostrar capacidad de adaptación e inventiva si quiere mantener la estabilidad y el crecimiento de las últimas décadas. 

Cosecha de soja en Luís Eduardo Magalhães, estado de Bahía, Brasil. Los expertos afirman que el posible excedente de soja generado por la desaceleración del comercio de Brasil con China se destinará a la industria local. (Imagen: Alamy)





Ganadería en Figueirópolis d'Oeste, en el estado de Mato Grosso, Brasil. El sector ganadero es el principal motor de la deforestación en la Amazonía brasileña (Imagen © Ricardo Funari / Greenpeace)

[Tian Yan Baxter](#)

El 'pasaporte verde' puede fomentar el comercio sostenible de carne vacuna de Brasil a China

La trazabilidad de la carne vacuna es un reto complejo pero las iniciativas bilaterales avanzan, escribe Tian Yan Baxter

El año pasado marcó un hito en la diplomacia bilateral sobre comercio sostenible entre Brasil y China, y supuso el inicio de un nuevo capítulo en su diálogo sobre los vínculos de la agricultura con la conservación de la biodiversidad y el cambio climático.

Durante el año, el Global Environment Institute (GEI), organización china de la sociedad civil en la que trabajo, puso en marcha asociaciones con varias entidades públicas brasileñas para facilitar iniciativas transfronterizas en el terreno que fomenten la buena

gobernanza y las prácticas comerciales sostenibles.

En marzo de 2022, GEI firmó un Memorando de Entendimiento para cooperar en iniciativas de sostenibilidad con actores de Mato Grosso, el estado del centro-oeste de Brasil que es el principal productor de carne vacuna y soja del país. También se firmó un acuerdo con el Consorcio Amazonía Legal, que reúne a nueve gobiernos estatales amazónicos en torno a iniciativas de desarrollo sostenible.

A raíz de estos acuerdos se están estudiando acciones

concretas. Entre ellas figura el protocolo de “pasaporte verde” para productos de carne vacuna, en cuyo marco se está diseñando un sistema piloto de trazabilidad. El objetivo es proporcionar información sobre la sostenibilidad de los productos de carne vacuna brasileños a los consumidores chinos mediante códigos de barras en los envases de los alimentos.

Mediante investigación técnica, trabajo de campo, análisis de políticas y diseño de pilotos, esta asociación –que reúne al GEI con el gobierno del estado y el Instituto de la Carne de Mato Grosso (IMAC), un instituto de investigación y tecnología centrado en la carne vacuna– tiene cuatro objetivos.

En primer lugar, la asociación pretende orientar las responsabilidades socioambientales de las partes interesadas del sector empresarial; en segundo lugar, ayudar a las entidades brasileñas a comprender el mercado chino para la carne vacuna de calidad producida de forma sostenible; en tercer lugar, evaluar la viabilidad de la distribución de dichos productos en China y los posibles mecanismos financieros y de mercado para promoverlos; y, por último, analizar el establecimiento de sistemas de trazabilidad en términos administrativos, reglamentarios e institucionales.

La trazabilidad es una herramienta de la que todas las partes de una cadena de suministro se pueden beneficiar, pero también un proceso que requiere transparencia, divulgación

de información, creación de confianza y prácticas sostenibles. Si se hace bien, puede aportar beneficios a toda la cadena, fomentando la apertura y añadiéndole valor a productos que pueden llegar a posicionarse con precios superiores. También puede ayudar a promover la trazabilidad para la sostenibilidad como un cambio más amplio dentro de la industria.

Sin embargo, construir sistemas de trazabilidad transfronterizos como herramienta para abordar la deforestación vinculada a la producción de carne vacuna es un gran desafío. En primer lugar, rastrear el movimiento de animales en Brasil es complicado a nivel técnico, dada la cadena de suministro notoriamente compleja e indirecta, en la que el ganado se comercia regularmente entre distintas fincas en diferentes etapas de su crecimiento. También lleva mucho tiempo categorizar, conectar y normalizar diversos indicadores, modelos y herramientas de trazabilidad para el comercio internacional, con el fin de establecer sistemas autorizados y armonizados y que, en última instancia, sean favorables para las pequeñas y medianas empresas tanto de China como de Brasil.

No obstante, dados los beneficios potenciales de superar este reto, la asociación ha marcado el camino para facilitar el desarrollo de políticas públicas sólidas en el estado de Mato Grosso y fomentar un nicho de mercado para productos cárnicos trazables y de mayor calidad en China.

PASAPORTE VERDE: TRAZABILIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Una importante iniciativa de sostenibilidad surgida de las nuevas asociaciones es el desarrollo del “pasaporte verde” de Mato Grosso para los productos de carne vacuna, lanzado en 2022. Además de planificar el funcionamiento de este sistema de etiquetado, uno de los principales desafíos es lograr innovaciones que ayuden a verificar y popularizar la aplicación de las normas de trazabilidad socioambiental en todo el sector ganadero del estado.

La iniciativa prevé, en primer lugar, supervisar y capacitar al sector, ayudando a las empresas a comprometerse con los sistemas de trazabilidad y a acceder a ellos, de modo que la carne vacuna verificada como aceptable desde el punto de vista social y medioambiental pueda obtener la etiqueta de pasaporte verde de aquí a 2026. En segundo lugar, pretende clasificar las piezas vacunas y designar las consideradas de calidad “superior”. Se trata de un medio tanto para cumplir con las responsabilidades del Estado en materia de gobernanza medioambiental como para inspeccionar la calidad de los alimentos.

Se trata de una iniciativa ambiciosa, y potencialmente revolucionaria, ya que el gobierno de Mato Grosso se dirigirá tanto a los ganaderos directos como a los indirectos, y pretende que en última instancia sea un programa a nivel estatal en el que participen todos los productores.

A partir de 2026, si las actividades y compras de productores y mataderos no cumplen las normas del pasaporte verde –por ejemplo, al estar vinculadas a la deforestación a través de sus proveedores– se enfrentarán a restricciones en sus futuras transacciones. Las compras de ganado se limitarán hasta un 20% en relación con su última transacción (por ejemplo, dos vacas frente a diez), hasta que cumplan con los criterios socioambientales del programa. De este modo, se espera que la verificación de sus registros de transacciones pueda ayudar a influir y mejorar las actividades de los proveedores indirectos.

El protocolo del pasaporte verde está siendo ideado de manera conjunta por dos de los socios del Memorando de Entendimiento –el gobierno del estado de Mato Grosso y el IMAC– junto con el Instituto de Investigación Medioambiental de la Amazonía (IPAM). Desde entonces se han sumado otras entidades públicas, como el Ministerio Público Federal de Mato Grosso y las secretarías estatales de Medioambiente y de Desarrollo Económico.

Grupos industriales como el sindicato de empaques de carne de Mato Grosso, Sindifrigo-MT, y Acrimat, la asociación de criadores, también se han sumado a la asociación, así como partes interesadas del sector empresarial, incluidos los gigantes del procesamiento de carne JBS y Marfrig.

El protocolo se asienta sobre una sólida base



Producción de cuero en Cáceres, Mato Grosso. La cooperación entre Brasil y China podría crear oportunidades para revertir los efectos nocivos del sector de la carne vacuna (Imagen: Alamy)

de marcos normativos nacionales y subnacionales, que incorporan, entre otros, el Código Forestal, una ley que obliga a los terratenientes de la Amazonía a mantener una porción de sus tierras como bosque; el Protocolo de Seguimiento de Proveedores de Ganado en la Amazonía (BeefonTrack), que estandariza el seguimiento del origen de los animales y la auditoría en una serie de mataderos; el Programa de Reinserción y Seguimiento del IMAC, una plataforma para el seguimiento de la remediación ambiental en las explotaciones que han participado en la deforestación ilegal; y la ley estatal de Mato Grosso que estableció el IMAC y delineó su responsabilidad de promover la sostenibilidad en el sector de la carne vacuna.

Esta fusión de normativas ayuda a tender puentes entre las iniciativas federales y regionales, fomentando sinergias positivas de forma estratégica y rentable. Por consiguiente, el protocolo tiene en cuenta el desarrollo y

los planes agrícolas del Brasil contemporáneo, y evalúa los activos medioambientales de cada explotación mediante la valoración de la recuperación de pasturas degradadas y/o zonas deforestadas irregularmente, mientras mejora la productividad.

Además, aprovechar el sistema de seguimiento BeefonTrack puede ayudar a difundir el monitoreo de la deforestación ilegal entre los productores. Este alto grado de compatibilidad política puede traducirse en menores costos para los productores en la adaptación a políticas nuevas y en evolución. También aumenta la oportunidad de extender este tipo de programa más allá de Mato Grosso y convertirse en un sistema de verificación a escala nacional, y permitir así la posibilidad de reposicionar la identidad de la carne vacuna brasileña.

El protocolo es también una iniciativa oportuna para preparar a los productores a conectarse sin problemas con ciertas normativas

nuevas en los mercados de consumo, como la ley de deforestación de la Unión Europea, que pretende impedir que entren productos cultivados o criados en tierras deforestadas a los países del bloque.

Además del pasaporte verde, el gobierno del estado de Mato Grosso también está elaborando instrumentos jurídicamente vinculantes para aplicar la verificación de las normas de sostenibilidad, diseñando mecanismos financieros como incentivos fiscales, y desarrollando plataformas de monitoreo y datos para identificar a los productores responsables, con el fin de aumentar su credibilidad y visibilidad.

POSIBLES VÍNCULOS CON CHINA

Para apoyar estos esfuerzos de sostenibilidad, en mayo de 2023 GEI participó en un viaje de campo a cinco ciudades en China, organizado por el gobierno del estado de Mato Grosso. La organización actuó como intermediaria y guía para los actores de la cadena de suministro brasileña, ayudando a trazar las rutas comerciales potenciales para que los productos verificados de Mato Grosso lleguen a los consumidores en China.

El trabajo de campo tuvo resultados concretos, como la firma por parte del GEI y el IMAC de Memorandos de Entendimiento con asociaciones de la industria cárnica de las ciudades de Tianjin y Chongqing. Con ellos se pretende, entre otras cosas, fomentar el intercambio de datos y el comercio estable entre las

múltiples partes interesadas. El puerto de Tianjin gestionó más de un tercio del total de mercancías importadas por China en 2022, mientras que Chongqing tiene una enorme demanda de carne vacuna congelada como elemento clave de su plato más famoso: el hot pot.

El viaje también facilitó el contacto con organismos de certificación, financieros y aduaneros de Beijing, y promovió diálogos entre gobiernos e instituciones. En ellos también se analizó la integración de los mercados sostenibles, estudiando cuestiones como los incentivos fiscales y los acuerdos comerciales recíprocos, entre otras.

Estas conversaciones ponen de manifiesto que ambos países se encuentran en los inicios del entendimiento mutuo y de alcanzar un discurso común sobre la agricultura sostenible, que para Brasil es “neutra en carbono” y “baja en carbono”, pero que para China puede centrarse más en los alimentos “verdes” y orgánicos. Desde el punto de vista técnico, no es sencillo trasladar y traducir a China las iniciativas de certificación brasileñas, ya que ambas aplican sistemas individuales para evaluar los productos sostenibles. Por tanto, no es fácil integrar rápidamente los mercados sostenibles establecidos de ambas partes y reconocer las buenas prácticas agrícolas de cada país.

La limitada diplomacia y cooperación bilaterales de los últimos años ha hecho que la atención de China hacia

la agricultura sostenible de Brasil se haya concentrado únicamente en la cuestión de la deforestación, de alcance internacional. Además, la rica experiencia política y sobre el terreno de Brasil –ya sea la integración de los sistemas forestales y ganaderos o la intensificación agrícola que ha hecho que el país pase de ser un importador neto hace 50 años a compartir hoy la responsabilidad de alimentar al mundo– no está bien documentada en China. En cuanto a los intereses comunes de ambos países, como la eliminación de la pobreza, los medios de vida alternativos y la digitalización, las conversaciones aún no están estructuradas.

La imagen del sector agrícola brasileño como poco respetuoso con el medioambiente se ha ido extendiendo poco a poco en China. Esto no ayudaría a la promoción de iniciativas brasileñas como el pasaporte verde. Por lo tanto, es extremadamente urgente que ambos países se comuniquen y cooperen en enfoques innovadores para revertir los impactos nocivos del sector vacuno brasileño y modificar su mala imagen.

Para Mato Grosso es prioritario comprometerse proactivamente con China y compartir las fortalezas de cada uno. Este compromiso podría tener un impacto significativo a la hora de llenar lagunas y vacíos en la relación entre Brasil y China, superar los desafíos en el acceso a la información, construir diálogos entre ambos países y ayudar a aumentar la presencia de organizaciones brasileñas en China. 🇧🇷

Brasil impulsa la recuperación de tierras degradadas

Pequeñas iniciativas apoyan esfuerzos del gobierno para recuperar 12 millones de hectáreas de tierra para 2030

El agricultor Dercílio Pupin llegó al municipio de Piracaia, estado de São Paulo, en 2013, con la idea de cultivar alimentos orgánicos. Desafortunadamente, el terreno que recién había adquirido de cuatro hectáreas estaba seco, con el suelo compactado y con poca vegetación.

Una de las peores crisis de agua de la historia del estado comenzó ese año. En 2014, la capacidad de los cinco embalses de agua del sistema

Cantareira, que abastecen a 8,8 millones de personas en los alrededores, se redujo a casi cero.

El deterioro del entorno natural de la región precedió a esta crisis. El mapeo de la región realizado en ese momento por el Instituto de Investigaciones Ecológicas (IPÊ) reveló 21.000 hectáreas de riberas sin vegetación — áreas que, por ley, deberían haber sido protegidas — y otras 100.000 hectáreas de pasturas degradadas.



Entre esas pasturas degradadas se encontraba el de Pupin. Cuenta a Diálogo Chino que el ex dueño pastoreaba más de 300 cabezas de ganado “de manera desorganizada”, incluso cerca de manantiales.

Hoy, sin embargo, Pupin ha visto mejoras en la salud de su parcela después de participar en programas de restauración, lanzados en medio de un esfuerzo nacional por recuperar millones de hectáreas de tierra degradada en todo Brasil, una iniciativa que ha cobrado impulso bajo un nuevo presidente, presentando oportunidades y desafíos para el gobierno y los productores por igual.

NUEVA ERA PARA LA RESTAURACIÓN DE TIERRAS

Para darle nueva vida a su terreno, Pupin se sumó a un programa de restauración del ayuntamiento y a otro del IPÊ llamado Semeando Água (Agua de Siembra). Pupin ya puede ver mejoras: “El año que llegamos aquí, todo eran claros, apenas había un árbol... En las áreas agroforestales [recién restauradas], ya hay

lugares donde el bosque está un poco más avanzado; hay una mejor infiltración [del agua] en el suelo”.

Agrosilvicultura

La agrosilvicultura o agroforestería es la práctica de incorporar árboles a la agricultura. Esto se puede llevar a cabo de varias maneras, como plantar árboles dentro y alrededor de las pasturas, o cultivar dentro de un bosque. Los árboles secuestran carbono de forma natural y mejoran la salud del suelo y la biodiversidad, por lo que la agrosilvicultura ofrece una alternativa sostenible a la simple tala de bosques para la agricultura.

¿Qué es la degradación del suelo?

Los suelos clasificados como degradados han perdido sus características saludables, limitando así su capacidad de proporcionar servicios beneficiosos a su ecosistema, como la retención de nutrientes y agua. La degradación del suelo puede ser causada por la explotación humana.



La agrosilvicultura incorpora árboles nativos a los sistemas agrícolas y puede ayudar a mejorar la salud del suelo. Otros beneficios potenciales incluyen el control de la erosión, la retención de nutrientes y humedad y una mayor oxigenación. (Imagen: Lucas Ninno / Diálogo Chino)

“La idea es convertir el área alrededor de Cantareira en un centro de producción agroecológica”, dice Alexandre Uezu, un Coordinador de Semeando Água.

Semeando Água es una de las muchas iniciativas independientes en todo Brasil que contribuyen al Plan Nacional para la Recuperación de la Vegetación Nativa (Planaveg) publicado por el gobierno en 2017. Los objetivos del plan incluyen “restaurar, reforestar e inducir la regeneración natural” de 12 millones de hectáreas de

tierras forestales y crear 5 millones de hectáreas de “sistemas agrícolas integrados” que combinen tierras de cultivo, pasturas y bosques, ambos para 2030.

Según el mapeo del Observatorio de Restauración y Reforestación, Brasil ha agregado 9,35 millones de hectáreas de plantaciones de árboles hasta ahora, en su mayoría de monocultivo, pero sólo 79.100 hectáreas de tierra han sido clasificadas como restauradas.

Además, la magnitud del problema es mucho mayor de lo que sugieren los objetivos de Brasil: según la red de seguimiento ambiental MapBiomas, el país tiene 95,5 millones de hectáreas de pasturas degradadas, equivalente a la superficie de Venezuela. “Gran parte de la superficie deforestada en el país es para ganadería, y estas pasturas están degradadas”, explica Ane Alencar, investigadora de la red.

A través de políticas nacionales actuales y futuras y programas de estímulo financiero financiados por el estado, Brasil ahora busca impulsar sus esfuerzos de restauración de tierras.

La reutilización de las pasturas degradadas de Brasil es uno de los principales objetivos ambientales del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En su discurso de toma de posesión en enero, Lula mencionó el tema, mientras que en abril afirmó que las inversiones en la restauración de pasturas pueden “duplicar la

productividad [agrícola], sin perturbar a las poblaciones indígenas ni a los bosques”.

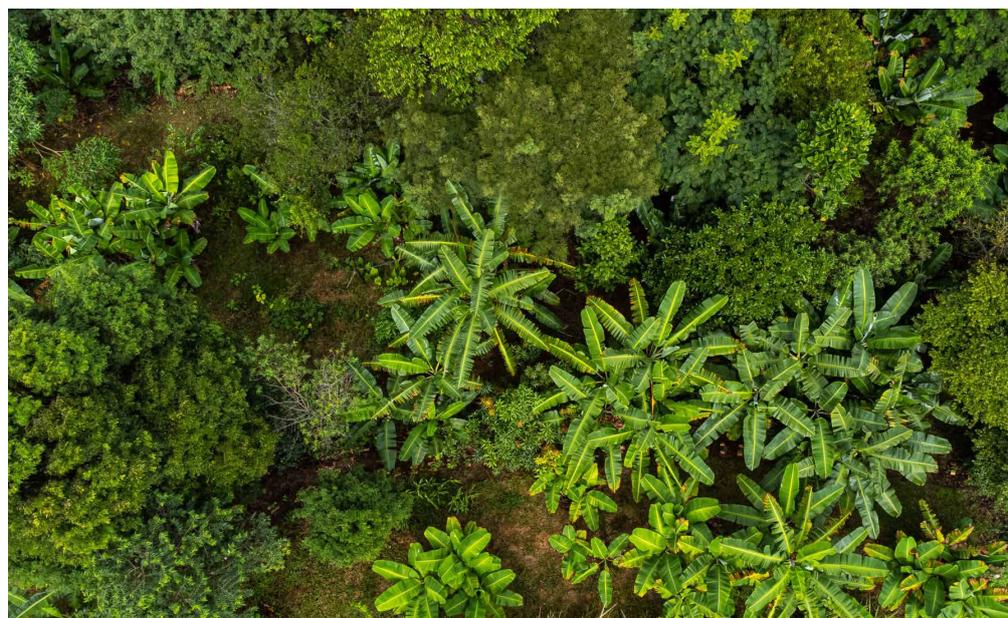
UN DESAFÍO GLOBAL

Según el informe Global Land Outlook 2 de la ONU, publicado en 2022, la humanidad ya ha “transformado más del 70% de la superficie terrestre de la Tierra desde su estado natural, provocando una degradación ambiental sin precedentes y contribuyendo significativamente al calentamiento global”. En 2018, se estimó que la degradación de la tierra y sus consecuencias para el agua y la seguridad alimentaria afectaron la vida de 3.200 millones de personas.

La degradación de los suelos de la Tierra también está interrelacionada con otras crisis ambientales. Alencar dice que los incendios, la tala y la fragmentación del paisaje son los principales vectores

de la degradación del suelo en los bosques húmedos como la Amazonía, mientras que en sabanas como el Cerrado, los monocultivos de cereales y la ganadería extensiva son los principales culpables. Las sequías graves más frecuentes y los vendavales cada vez más fuertes, impulsados por el cambio climático, exacerbaban la degradación del suelo, añade.

En los últimos años, este problema global ha provocado una respuesta global. En la Declaración de Nueva York sobre los Bosques de 2021, más de 200 actores (incluidos gobiernos nacionales y subnacionales, pueblos indígenas y empresas) se comprometieron a restaurar 350 millones de hectáreas de tierras degradadas para el 2030. A esto le siguió un acuerdo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad de



Vista aérea de plátanos plantados en un bosque de Nazaré Paulista, estado de São Paulo. Los sistemas agroforestales pueden implicar la plantación de árboles dentro y alrededor de las pasturas, o realizar la agricultura dentro de un bosque. (Imagen: Lucas Ninno / Diálogo Chino)

2022, la COP15, en la que casi todos los países del mundo se comprometieron a restaurar el 30% de todos los ecosistemas terrestres y marinos dentro de esta década.

En un viaje a Beijing en abril, Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, dijo que el país “puede aprender de la experiencia china” de recuperación de áreas degradadas.

Silva probablemente se refería al programa nacional chino Grain for Green, cuyo objetivo es regenerar el suelo dañado por la agricultura y la ganadería. Desde su creación en 1999, el programa ha restaurado más de 30 millones de hectáreas de bosques, campos, vegetación montañosa y humedales.

Grain for Green es voluntario, pero existen incentivos para unirse. Entre 1999 y 2019,

el gobierno invirtió más de 442 mil millones de RMB (60 mil millones de dólares estadounidenses) en el programa, proporcionando semillas, subsidios y asistencia técnica a los propietarios de tierras, entre otros beneficios. En 2019, los subsidios del programa habían beneficiado directamente a más de 41 millones de hogares agrícolas.

SURGE NUEVA INVERSIÓN

Con el regreso de Lula al poder, las iniciativas ambientales vuelven a ser una prioridad gubernamental. En mayo, el gobierno creó el Consejo para el Desarrollo Económico Social Sostenible, un organismo formado por representantes de la sociedad civil y del Estado. En agosto, el consejo había creado un grupo de trabajo sobre restauración de tierras.

El ministro de Relaciones

Institucionales de Brasil, Alexandre Padilha, dice que el objetivo del grupo de trabajo es presentar a Lula “propuestas concretas” para recuperar áreas degradadas a principios de octubre.

En junio se lanzó una nueva versión del Plan Safra. Con un presupuesto de casi 7 mil millones de reales (1,4 mil millones de dólares), este programa gubernamental apoya a medianos y grandes productores agrícolas en la recuperación de tierras degradadas.

Planaveg también habría recibido financiación: 14



Plántulas de café que crecen entre plátanos en una zona agroforestal cerca de Nazaré Paulista, estado de São Paulo (Imagen: Lucas Ninno / Diálogo Chino)



Una abeja se alimenta de néctar en un área reforestada por el Instituto de Investigaciones Ecológicas (IPÊ) cerca del embalse de Atibainha, estado de São Paulo (Imagen: Lucas Ninno / Diálogo Chino)



Hembra de zafiro golondrina (Thalurania furcata) en una de las áreas reforestadas por el IPÊ. La agrosilvicultura puede mejorar la biodiversidad y la salud del suelo. (Imagen: Lucas Ninno / Diálogo Chino)

“

La restauración tiene el potencial de impulsar una bioeconomía local

Rita de Cássia Mesquita

Secretaria de biodiversidad, bosques y derechos de los animales

millones de reales (2,8 millones de dólares) de uno de los mayores financiadores medioambientales del mundo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. “Los recursos están asegurados”, dice Rita de Cássia Mesquita, secretaria de biodiversidad, bosques y derechos de los animales del Ministerio de Medio Ambiente. “Ahora tenemos que discutir y avanzar con las estrategias [de restauración]”.

Mientras tanto, en noviembre, el Banco Mundial donó 25 millones de dólares para recuperar pasturas degradadas en Brasil. Un mes después, la firma de inversión privada Paramis Capital lanzó un fondo para transformar tierras brasileñas degradadas en áreas productivas.

Por otra parte, en abril, la empresa china de materias primas Cofco International — un actor importante en el comercio de granos brasileño — también habría expresado interés en financiar esfuerzos para recuperar tierras agrícolas degradadas en el país, aunque aún no se han anunciado compromisos firmes.

A pesar de las grandes sumas de dinero necesarias,

Mesquita dice que la acción sobre la degradación de la tierra y el suelo puede generar beneficios financieros: “La restauración tiene el potencial de impulsar una bioeconomía local”.

Una investigación realizada por la organización brasileña de desarrollo sostenible Instituto Escolhas también sugiere que grandes insumos generarán resultados aún mayores. Por ejemplo, el instituto estima que Brasil todavía necesita 228 mil millones de reales (46 mil millones de dólares) para alcanzar su objetivo de 12 millones de hectáreas de bosques restaurados para 2030, pero también dice que esto podría crear 2,5 millones de empleos y generar ingresos de 776,5 mil millones de reales (157 mil millones de dólares).

Sin embargo, la concesión de crédito rural con financiación pública ha sido duramente criticada. Por ejemplo, el Código Forestal de Brasil de 2012 se adoptó para gestionar la conservación de la vegetación nativa en tierras rurales privadas. La ley dicta que los propietarios de tierras que no hayan conservado esta vegetación ahora deben hacerlo por su

cuenta. Sin embargo, según el Observatorio del Código Forestal (OCF), que supervisa la aplicación de esta ley, estos propietarios todavía pueden obtener crédito rural público.

La OCF estima que aún quedan por restaurar hasta 20 millones de hectáreas de vegetación nativa protegida por el Código Forestal. La secretaria ejecutiva de la OCF, Roberta Del Giudice, dijo a Diálogo Chino que no se debe otorgar crédito público “al menos, a quienes no cumplan con esta ley”.

RESTAURAR ENTORNOS Y ECONOMÍAS

Diez años después de su llegada, las tierras de Dercílio Pupin utilizan ahora un sistema agroforestal. Piracaia se encuentra dentro de la Mata Atlántica, por lo que Pupin integró especies vegetales nativas de este bioma, como los árboles de jacarandá, jequitibá rosa y tamboril. También se han incorporado productos económicamente más fructíferos, como el café en grano.

El agricultor dice que este sistema agroforestal ahora genera ingresos suficientes y que está creando una cooperativa con otros miembros de Semeando Água para ayudar con el acceso a los mercados de alimentos.

En una década, Semeando Água capacitó a 334 productores y técnicos locales, regeneró 100 hectáreas de pasturas degradadas, replantó 70 hectáreas de áreas protegidas

y creó 33 hectáreas de sistemas agrícolas sostenibles, según su equipo. Los corredores biológicos se han restablecido, beneficiando a especies de monos en peligro de extinción en el Bosque Atlántico, como el tití de penacho leucocitario y el muriquí del sur.

Sin embargo, Pupin advierte que faltan incentivos para alentar a los pequeños productores. Por ejemplo, recibe sólo 283 reales (57 dólares estadounidenses) de fondos municipales al año para proteger 1,06 hectáreas de bosque en su tierra; El salario mínimo en Brasil es de 1.320 reales (265 dólares estadounidenses) al mes. Gustavo Brichi, ingeniero forestal del IPÊ, dice que la institución debe ampliar su estrategia más allá de la restauración de la vegetación, para enfocarse en modelos productivos pero sustentables de propiedades rurales, “sin necesidad de intervenciones abruptas”.

“Hoy, después de diez años de estar aquí, puedo ver que la rueda está empezando a girar”, dice Pupin. “Plantamos el maíz, el maíz va al pollo... agregamos estiércol a las plantas, las plantas crecen, vuelve al pollo. Ya se está cerrando un ciclo... Cuando los pagos por servicios ambientales sean ventajosos, mucha gente se sumará”.

Yedan Li contribuyó con este artículo.

* Kevin Damasio y el fotógrafo Lucas Ninno viajaron a la región de Cantareira por invitación del Instituto de Investigaciones Ecológicas (IPÊ).



Gustavo Brichi, ingeniero forestal del IPÊ, enseña a estudiantes técnicas para plantar banano en sistemas agroforestales, en la Escuela Estatal Francisco Derosa, en Nazaré Paulista (Imagen: Lucas Ninno / Diálogo Chino)



Plántulas de tamboril en el vivero de especies nativas del IPÊ, utilizadas para proyectos de restauración en Nazaré Paulista (Imagen: Lucas Ninno / Diálogo Chino)



Diálogo Chino

Diálogo Chino es la única plataforma de periodismo independiente dedicada a comprender mejor la relación China-América Latina y sus desafíos de desarrollo sostenible.

**Oficina de Londres: China Dialogue Trust, 15 Printing House Yard,
Perseverance Works, London, E2 7PR
United Kingdom**

Contacto: informacion@dialogochino.net

 [@dialogochinoES](https://twitter.com/dialogochinoES)  [@dialogochino](https://facebook.com/dialogochino)